

C.A. de Santiago

Santiago, quince de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Comparece Oscar Aguirre Droguett, abogado, en representación de **Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.**, y deduce reclamo de ilegalidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 y 29 de la ley 20.285 (en adelante también “Ley de Transparencia” o “LT”) en contra de la Decisión de Amparo (en adelante “DA”) C-11758-22 pronunciada por el **Consejo para la Transparencia** (en adelante “CPLT”) en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023, en cuya virtud acogió el amparo interpuesto por doña Hilda Isabel Olivares Leiva en contra de la Superintendencia de Pensiones. Solicita que se acoja el reclamo, declarando la ilegalidad de la decisión de amparo, con costas.

Sostiene que el 7 de noviembre de 2022, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva solicitó a la Superintendencia de Pensiones la siguiente información: “Notas explicativas de los informes diarios de todas las administradoras de fondos de pensiones, comprendidas entre el 01 de enero de 2015 hasta 01 enero del año 2022”. La Superintendencia confirió traslado a las AFP, las que se opusieron, por lo que el organismo denegó la información requerida, en los términos dispuestos por el inciso 3° del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva dedujo reclamo ante el CPLT solicitando amparo a su derecho a la información, el que fue acogido por dicho organismo.

Argumenta que la decisión reclamada debe ser dejada sin efecto, pues de acuerdo al ámbito de aplicación de la Ley N° 20.285, las AFP no figuran como sujeto pasivo.

Añade que la información solicitada es objeto de la reserva contenida en el artículo 21 de la citada ley, esto es: i.- La información requerida tiene el carácter de secreta; ii.- La información solicitada es objeto de razonables esfuerzos de las Administradoras para mantener el secreto ya que, en virtud de lo dispuesto en el artículo N° 154 del Decreto Ley N° 3.500, las AFP tienen mecanismos de resguardo de la información contenida en los informes diarios; y iii.- Que la información tenga valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva, pues si la información se diera a conocer, cada uno de sus titulares perdería la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VWWRXMDZMBY

ventaja competitiva que les da el secreto de la información sobre sus estrategias de inversión, además de generar un "efecto manada" o "efecto de arrastre", por el cual los agentes del mercado actúan en una misma dirección sin hacer un análisis realista de la situación, movidos por una determinada noticia o dato que afectaría el valor de las inversiones de los Fondos de Pensiones.

Adiciona que la reserva de la información solicitada se encuentra amparada por lo dispuesto en el Decreto Ley N° 3500 y en el artículo 50 de la Ley N° 20.255.

Por otra parte, asevera que la divulgación de la información solicitada afecta su derecho de propiedad. En efecto, la información no divulgada debe ser protegida cuando (i) tiene valor comercial por ser secreta, (ii) ha sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto y, (iii) no es conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza. En relación con lo señalado en el numeral (i), el procedimiento relativo a las notas explicativas de los informes diarios contiene información esencial sobre la forma en como AFP PlanVital S.A., ejecuta cada proceso asociado a los estados financieros de los Fondos de Pensiones, por consiguiente, corresponde concluir que la información que contienen los procedimientos antes señalados tiene el carácter de secretos. Asimismo, respecto del numeral (ii), las Administradoras de Fondos de Pensiones, en relación a la información en cuestión, deben efectuar razonables esfuerzos para mantener su secreto, en virtud de la prohibición de comunicación que les afecta, según se argumentó anteriormente, siendo entregada solo a la Superintendencia de Pensiones en su calidad de ente fiscalizador. Por último, en consideración al requisito exigido mediante el numeral (iii), en caso que la información solicitada se entregue a terceros, la AFP perdería la ventaja competitiva que le otorga el carácter de secreto de dicha información y, por lo tanto, su publicidad otorgaría a terceros conocimiento relevante sobre las formas de actuar y métodos utilizados por AFP Planvital S.A., en este caso, en los procesos que son aplicados en la recaudación electrónica y manual sobre pago de cotizaciones previsionales.

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicita que se acoja el reclamo en todas sus partes, declarando la ilegalidad de la decisión de amparo ya referida, con costas; y, por consiguiente, declarar que la



Superintendencia de Pensiones no está obligada a proporcionar a la Sra. Olivares la información que requiere.

SEGUNDO: Que informó el Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del reclamo, con costas.

Luego de reseñar los principales hitos de la tramitación del amparo interpuesto y los argumentos de la AFP reclamante, sostiene que la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP ha sido ratificada reiteradamente por la jurisprudencia emanada de esta Corte y de la Excm. Corte Suprema, en las sentencias que cita.

Expone que la información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República y artículos 5°, 10 y 11 letra c) de la LT, aunque haya sido generada por las AFP, pues obra en poder de la Superintendencia de Pensiones en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, formando parte de expedientes administrativos y ha servido de fundamento a resoluciones del mismo carácter.

Asevera que la entrega de la información que se ha ordenado proporcionar en la Decisión de Amparo reclamada, no afecta los derechos económicos ni comerciales de la AFP reclamante, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Añade que el artículo 50 de la ley 20.255, el artículo 151 del D.L. 3.500 y el artículo 164 de la ley 18.045 no constituyen leyes de quórum calificado que establezcan la reserva de las notas explicativas.

Por último, estima que no procede la condena en costas al Consejo en la resolución de los reclamos de ilegalidad.

Pide el rechazo del reclamo de ilegalidad planteado por AFP Plan Vital S.A., con costas.

TERCERO: Como puede derivarse de lo anterior, la AFP reclamante plantea cuatro tópicos de presunta ilegalidad: a) Ámbito de aplicación de la Ley N° 20.285, sosteniendo que su representada no es sujeto pasivo de esa normativa; b) La información solicitada es objeto de la reserva contenida en el artículo 21 de la LT; c) La reserva de la información solicitada se encuentra amparada por lo dispuesto en el D.L. N° 3.500 y en artículo 50 de la Ley N°



50 de la Ley N° 20.255 y d) Divulgación de la información solicitada afecta el derecho de propiedad de AFP Planvital S.A.

CUARTO: Que tal como lo sostiene el Consejo para la Transparencia, el tema que ha sido sujeto al escrutinio judicial en esta causa ya ha sido resuelto por la judicatura en las causas aludidas por dicha institución.

En primer lugar, cabe citar el reclamo deducido por la Superintendencia de Pensiones en causa Rol 10.390-2017, en la que se hicieron partes como coadyuvantes de la Superintendencia las AFP Habitat, Modelo y Plan Vital, dictándose sentencia definitiva el 12 de noviembre de 2018, ejecutoriada, que rechazó el reclamo, el que se fundaba en los mismos argumentos ahora esgrimidos por la AFP reclamante.

Lo mismo sucedió con las sentencias dictadas con fecha 29 de julio de 2021 en las causas Roles 583-2019, 585-2019, y 591-2019, en virtud de reclamos interpuestos por AFP Capital, Modelo, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte, rechazando los reclamos. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja mediante autos Rol N° 53.109-2021, el cual fue declarado inadmisibile por la Excm. Corte Suprema en sentencia de fecha 31 de agosto de 2021. Luego, el CPLT con fecha 31 de marzo de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C7534-19 (que dispuso la entrega de copia de las notas explicativas de los informes diarios D1 de las AFP, desde el año 2002 hasta septiembre de 2019), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad en las causas Roles N° 189-2020, 213-2020, y 214-2020, interpuestos por AFP Modelo, Capital, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas con fecha 8 de junio de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad antes mencionados.

Posteriormente, el CPLT con fecha 9 de abril de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C2270-19 (que dispuso la entrega de copia de los informes diarios de los fondos de pensiones de los meses de junio a octubre del año 2008, como asimismo, las notas explicativas y balances), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad Roles N° 226-2020, 235-2020, y 238-2020, interpuestos por AFP Modelo, Provida, y Capital, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas con fecha 2 de agosto de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja



mediante autos Rol N° 56.177-2021, el cual fue declarado inadmisibile por la Excm. Corte Suprema en sentencia de fecha 19 de agosto de 2021.

Luego, es doctrina ya asentada por esta Corte de Apelaciones y por la Excm. Corte Suprema, la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP.

QUINTO: Siguiendo la doctrina sustentada en los fallos referidos, y en relación con el primer motivo de ilegalidad que plantea la reclamante, las AFP están sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, para lo cual aquellas deben remitir a ésta diversa información que le permite ejercer su función de control. Dentro de este contexto, de acuerdo al Libro IV, Título VIII, Capítulo II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el Informe Diario que debe ser proporcionado por las AFP a la Superintendencia, está compuesto por un conjunto de datos codificados a través de diversos formularios electrónicos, entre ellos el denominado “D1”, el cual comprende: Balance Diario, Flujo de Caja, Estado de Variación del Patrimonio y otra información general. Por su parte el Libro IV, Título VII, letra C, Capítulo II, Sección II, “Notas Explicativas”, en relación a los estados financieros señala que: *“Los estados financieros de los Fondos de Pensiones deberán ser acompañados por notas explicativas, en adelante notas, las que formarán parte integrante de ellos. Estas notas deberán ser preparadas por la administración de la sociedad y constituyen una relación de antecedentes que aportan información adicional sobre las cifras contenidas en los estados financieros, así como la divulgación de información que no está directamente reflejada en dichos estados, permitiendo de esta manera, una mejor comprensión de éstos y contribuyendo una base objetiva para los usuarios de dicha información”*.

A su vez, el Capítulo IV, letra A, N° 8, al referirse a las “notas explicativas” indica que éstas: *“deberán utilizarse para detallar los movimientos en cualesquiera de las partidas que correspondan a los siguientes ítems: Otros Ingresos, Otros Egresos, Otros Aumentos, Otras Disminuciones, Valores por Depositar Nacionales, Valores por Depositar Extranjeros, Valores en Tránsito, Excesos de Inversión, Provisión Impuestos y Otros, Valor del Patrimonio del Fondo de Pensiones, Provisión por inversiones en activos alternativos, Financiamiento de Cargos Bancarios y Cargos Bancarios”*.



De lo anterior puede colegirse, entonces, que las AFP sí están sujetas a la normativa de la Ley de Transparencia, desde que la información cuya divulgación se solicita es pública.

SEXTO: En cuanto al segundo motivo de ilegalidad, esto es que las referidas notas explicativas están amparadas por la causal de reserva de información del artículo 21 N° 2 de la LT, aquello se funda en el hecho que la entrega de la información solicitada afecta sus derechos económicos y comerciales, ya que los informes diarios de los fondos de pensiones, las notas explicativas y los balances, constituyen información de su propiedad y de carácter estratégico, cuya divulgación, no solo afectaría a las propias administradoras sino que a todas las personas que se encuentran afiliadas a las mismas. Considera así que se trata de información que contiene las estrategias de inversión de los Fondos de Pensiones e invoca en su favor la normativa que indica.

SÉPTIMO: Como tantas veces se ha señalado, conforme al artículo 8° de la Constitución Política de la República, complementado por los artículos 10 y 21 de la LT, la publicidad de la información pública constituye la regla general y la reserva, su excepción. Por lo tanto, cuando se invoca la excepción a la regla, ella debe acreditarse en forma fehaciente y los preceptos legales invocados deben interpretarse siempre en forma restrictiva en relación al derecho invocado.

En efecto, el citado artículo 8° de la Carta Fundamental establece lo siguiente: *“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”*.

Por su parte el artículo 10 de la LT, prescribe lo siguiente: *“Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con*



presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo excepciones legales”.

A su vez, el artículo 21 N° 2 de la LT dispone como causal de reserva de la información *“Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”.*

OCTAVO: Que las notas explicativas permiten, precisamente, “explicar” o entender la información que se contiene en los formularios D1 que la AFP remite a la Superintendencia de Pensiones, es decir, se trata de un accesorio de dicho formulario y por lo tanto corre la misma suerte de ese documento. Siendo así, difícil resulta aceptar su carácter de reservado si estas forman parte del formulario D1 que se encuentra en poder de la Superintendencia y que además aparece publicado en el sitio web de la referida entidad pública. En consecuencia, no se entiende cómo dicha información que persigue explicar otra que es de carácter pública pueda revestir el carácter de reservada, porque de serlo hace ilusoria la primera. Cabe considerar además, que tratándose de información que está en poder de un órgano de la Administración, como lo es la Superintendencia y considerando que el artículo 10 de la LT desarrolla el principio de publicidad contenido en el artículo 8° de la Carta Política, la información requerida queda comprendida en más de alguno de los vocablos que menciona el mismo artículo por ejemplo “expedientes”, pues sin duda toda la información que la AFP remite a la Superintendencia conforma un expediente relativo a su información financiera o de inversión.

Por otra parte, la reclamante tampoco ha demostrado que la publicación de las notas explicativas afecte concretamente derechos comerciales o económicos suyos, siendo sus argumentos verdaderas especulaciones no demostradas fehacientemente, más aún si se considera que la información ordenada entregar es de antigua data y comprende los años 2015 a 2022.

NOVENO: En lo que respecta al tercer motivo de ilegalidad que indica la reclamante -vinculado al N° 5 del artículo 21 de la LT- en cuanto a que la decisión cuestionada es reservada, según se infiere de los artículos 151 y



154 letra d) del Decreto Ley N° 3500 de 1980, también corresponde desechar tales planteamientos.

Al respecto cabe señalar que, la primera norma dispone: *“Los directores de una Administradora, sus controladores, sus gerentes, administradores y, en general, cualquier persona que en razón de su cargo o posición tenga acceso a información de las inversiones de los recursos de un Fondo que aún no haya sido divulgada oficialmente al mercado y que por su naturaleza sea capaz de influir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones, deberán guardar estricta reserva respecto de esa información. Las personas a que se refiere este inciso estarán afectas a lo dispuesto en el artículo 166 de la ley N° 18.045”*.

“Asimismo, se prohíbe a las personas mencionadas en el inciso anterior valerse directa o indirectamente de la información reservada, para obtener para sí o para otros, distintos de cualquiera de los Fondos de Pensiones, ventajas mediante la compra o venta de valores”.

“Las personas que participen en las decisiones sobre adquisición, enajenación o mantención de instrumentos para alguno de los Fondos de Pensiones, no podrán comunicar estas decisiones a personas distintas de aquellas que deban participar en la operación por cuenta o en representación de la Administradora o de los Fondos”.

Como se ve, dicha disposición establece una prohibición de difundir información sobre inversiones aún no divulgada al mercado que pueda influir en la cotización de los valores de dicha inversión o pueda implicar ventajas a terceros, que no es el caso de autos, pues aquí se trata de dar a conocer las notas que explican los estados financieros de la AFP en el pasado, es decir, información respecto de la cual ya no se corre el riesgo que la norma intenta bloquear de otorgar ventajas a quien conoce de ella o que pudiera modificar los valores de las inversiones en períodos ya pasados.

En relación al artículo 154 letra d), este artículo dispone que: *“Sin perjuicio de lo establecido los artículos anteriores, son contrarias a la presente ley las siguientes actuaciones u omisiones efectuadas por las Administradoras: d) La comunicación de información esencial relativa a la adquisición, enajenación y mantención de activos por cuenta de cualquiera de los Fondos a personas distintas de aquellas que estrictamente deban*



participar en las operaciones respectivas, en representación de la Administradora”.

De lo expuesto puede observarse que tampoco esta norma impide la entrega de la información, pues se encuentra vinculada a operaciones presentes que se estén desarrollando y no a información pretérita como la que aquí se discute.

DECIMO: También se aludió en el punto tercero del reclamo al artículo 50 de la Ley N° 20.255; sin embargo, dicha norma cuando habla de confidencialidad y manejo de información privilegiada lo hace en relación a las políticas de solución de conflicto de intereses, que tampoco es el caso que nos ocupa.

UNDÉCIMO: Coadyuva a la decisión de publicidad lo dispuesto en el artículo 26 del D.L. 3.500 citado, norma que prescribe que: *“Toda publicación de la composición de la cartera de inversión de los distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que establezca una norma de carácter general de la Superintendencia. Con todo, esta última podrá publicar la composición de la cartera de inversión agregada de los Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado”.*

En consecuencia, por aplicación de esta norma es evidente que tratándose, en la especie, de publicidad referida a operaciones pretéritas la regla de publicidad es la que rige.

DUODECIMO: Finalmente, en lo relativo al último motivo de ilegalidad, esto es que la Decisión de Amparo impugnada vulnera el derecho de propiedad de la AFP, tampoco es acertada dicha tesis, desde que la información cuya publicidad se establece por el CPLT no tiene el efecto de develar sus operaciones en el mercado que permitan predecir sus operaciones e inversiones y lo debatido en la especie no es la propiedad que tenga la AFP sobre esos antecedentes, sino el acceso público a esa información y que fue solicitada para un fin específico dentro de un proceso administrativo.

DECIMOTERCERO: Que así, el reclamo de ilegalidad debe ser desestimado al no infringirse las normas que indica la reclamante en la decisión de amparo impugnada.



Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República y en los artículos 5, 10, 11 letra c) y 28 de la Ley N° 20.285, Ley de Transparencia, **se rechaza**, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido por Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. en contra de la Decisión de Amparo N° C-11758-22 pronunciada por el Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023

Se previene que la abogada integrante Sra. Catalina Infante Correa estuvo por condenar en costas a la reclamante.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Contencioso Administrativo-224-2023.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gay Gariazzo y por la Abogada Integrante señora Catalina Infante Correa. No firman el Ministro señor Mera ni la Abogada señora Infante por encontrarse ausentes.



Tomás Guillermo Gray Gariazzo
Ministro
Corte de Apelaciones
Quince de abril de dos mil veinticuatro
13:07 UTC-4



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VWWRXMDZMBY

Proveído por el Señor Presidente de la Séptima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a quince de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VWWRXMDZMBY

C.A. de Santiago

Santiago, quince de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece José Luis Maldonado, abogado, en representación de **Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.**, y deduce reclamo de ilegalidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 y siguientes de la ley 20.285 (en adelante también “Ley de Transparencia” o “LT”) en contra de la Decisión de Amparo C11749-2022 (en adelante “DA”), pronunciada por el **Consejo para la Transparencia** (en adelante “CPLT”) en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023, en cuya virtud acogió el amparo interpuesto por doña Hilda Isabel Olivares Leiva en contra de la Superintendencia de Pensiones. Solicita que se acoja el reclamo, declarando la ilegalidad de la decisión, con costas.

Sostiene que el 7 de noviembre de 2022, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva solicitó a la Superintendencia de Pensiones la siguiente información: “notas explicativas de los informes diarios de todas las administradoras de fondos de pensiones, comprendidas entre el 01 de enero de 2015 hasta 01 enero del año 2022”. La Superintendencia confirió traslado a las AFP, las que se opusieron, por lo que el organismo denegó la información requerida, en los términos dispuestos por el inciso 3° del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva dedujo reclamo ante el CPLT solicitando amparo a su derecho a la información, el que fue acogido por dicho organismo.

Argumenta que la decisión reclamada debe ser dejada sin efecto, por cuanto el proceso que llevó a la decisión de amparo sobre la información pública se encuentra viciado y afecta los derechos del debido proceso, denunciando vicios en la notificación respectiva que le impidieron ejercer correctamente su derecho a defensa.

Por otra parte, sostiene que la decisión debe ser dejada sin efecto, por cuanto la información a la que mediante ella se permite acceder, no es información pública o de una entidad pública, sino que constituye información privada, originada en una institución privada, y cuyo titular es una entidad privada, la que se pone en conocimiento de la Superintendencia para efectos de fiscalización. Añade que la información a la que mediante ella se permite acceder, constituye información sensible y de carácter reservado y, por lo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ETBMXMJZMBY

tanto, debe entenderse incluida en la causal de reserva del numeral 5 y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Por último, asevera que la decisión debe ser dejada sin efecto, pues conceder el acceso a la información que se ha solicitado afecta gravemente los derechos constitucionales de AFP Capital -libertad económica, propiedad, igualdad ante la ley- y de los afiliados -propiedad y seguridad social-, quienes son titulares finales de los Fondos de Pensiones que AFP Capital administra.

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicita que se acoja el reclamo en todas sus partes y, en consecuencia, se deje sin efecto la decisión del recurrido y, en su lugar, resuelva que se rechaza totalmente el amparo deducido, con costas.

SEGUNDO: Que informó el Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del reclamo, con costas.

Luego de reseñar los principales hitos de la tramitación del amparo interpuesto y los argumentos de la AFP reclamante, descartando todo vicio en el proceso administrativo que pudiere afectar el debido proceso, sostiene que la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP ha sido ratificada reiteradamente por la jurisprudencia emanada de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema, en las sentencias que cita.

Expone que la información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República y artículos 5°, 10 y 11 letra c) de la LT, aunque haya sido generada por las AFP, pues obra en poder de la Superintendencia de Pensiones en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, formando parte de expedientes administrativos y ha servido de fundamento a resoluciones del mismo carácter.

Asevera que la entrega de la información que se ha ordenado proporcionar en la Decisión de Amparo reclamada, no afecta los derechos económicos ni comerciales de la AFP reclamante, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Añade que el artículo 50 de la ley 20.255, el artículo 151 del D.L. 3.500 y el artículo 164 de la ley 18.045 no constituyen leyes de quórum calificado que establezcan la reserva de las notas explicativas.



Por último, estima que no procede la condena en costas al Consejo en la resolución de los reclamos de ilegalidad.

Pide el rechazo del reclamo de ilegalidad planteado por AFP Capital S.A., con costas.

TERCERO: Como puede derivarse de lo anterior, la AFP reclamante plantea cinco tópicos de presunta ilegalidad: a) La DA sobre la información pública se encuentra viciada y afecta los derechos del debido proceso; b) La información que se pretende obtener no es información pública o de una entidad pública, sino que es información privada; c) La información solicitada constituye información sensible y de carácter reservado, por lo que está contenida en causal de reserva prevista en artículo 21 N° 5 y N° 2 LT; d) La reserva de la información solicitada se encuentra amparada por lo dispuesto en los artículos 151 y 154 letra d) D.L. N° 3.500, en el artículo 50 de la Ley N° 50 de la Ley N° 20.255 y artículo 164 de la Ley N° 18.045, y e) Divulgación de la información solicitada afecta derechos constitucionales de AFP Capital S.A. como los de desarrollar su actividad económica específica; derecho de propiedad sobre los antecedentes relativos a la gestión que realiza; derecho de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria y derecho a la seguridad social y de propiedad que corresponde a los trabajadores en cuanto titulares finales de los Fondos de Pensiones.

CUARTO: Que tal como lo sostiene el Consejo para la Transparencia, el tema que ha sido sujeto al escrutinio judicial en esta causa ya ha sido resuelto por la judicatura en las causas aludidas por dicha institución.

En primer lugar, cabe citar el reclamo deducido por la Superintendencia de Pensiones en causa Rol 10.390-2017, en la que se hicieron partes como coadyuvantes de la Superintendencia las AFP Habitat, Modelo y Plan Vital, dictándose sentencia definitiva el 12 de noviembre de 2018, ejecutoriada, que rechazó el reclamo, el que se fundaba en los mismos argumentos ahora esgrimidos por la AFP reclamante.

Lo mismo sucedió con las sentencias dictadas con fecha 29 de julio de 2021 en las causas Roles 583-2019, 585-2019, y 591-2019, en virtud de reclamos interpuestos por AFP Capital, Modelo, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte, rechazando los reclamos. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja mediante autos Rol N° 53.109-2021, el cual fue declarado inadmisibile por la



Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 31 de agosto de 2021. Luego, el CPLT con fecha 31 de marzo de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C7534-19 (que dispuso la entrega de copia de las notas explicativas de los informes diarios D1 de las AFP, desde el año 2002 hasta septiembre de 2019), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad en las causas Roles N° 189-2020, 213-2020, y 214-2020, interpuestos por AFP Modelo, Capital, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas con fecha 8 de junio de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad antes mencionados.

Posteriormente, el CPLT con fecha 9 de abril de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C2270-19 (que dispuso la entrega de copia de los informes diarios de los fondos de pensiones de los meses de junio a octubre del año 2008, como asimismo, las notas explicativas y balances), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad Roles N° 226-2020, 235-2020, y 238-2020, interpuestos por AFP Modelo, Provida, y Capital, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas con fecha 2 de agosto de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja mediante autos Rol N° 56.177-2021, el cual fue declarado inadmisibile por la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 19 de agosto de 2021.

Luego, es doctrina ya asentada por esta Corte de Apelaciones y por la Excma. Corte Suprema, la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP.

QUINTO: Cabe señalar que el primer motivo de ilegalidad, fundado en aparentes vicios durante la tramitación del procedimiento administrativo debe ser rechazado, por cuanto este tipo de alegaciones no inciden sobre el fondo de lo resuelto en la DA que se impugna, tal como ha razonado esta Corte de Apelaciones en una reiterada jurisprudencia, atendida la naturaleza del reclamo de ilegalidad regulado en el artículo 28 de la LT.

En efecto, así se desprende de las sentencias de este Tribunal de Alzada recaídas en las causas ingreso Contencioso-Administrativo N° 252-2022, N° 187-2021 y N° 269-2022, de las cuales se puede extraer como jurisprudencia uniforme que *“... no puede utilizarse este recurso para impugnar supuestas irregularidades que pudieran haber ocurrido durante la tramitación del respectivo procedimiento ...”*, toda vez que este reclamo tiene



su fuente legal en el artículo 28 de la LT, disposición que solo puede permite revisar aquellos reclamos en que la presunta ilegalidad que se acusa sea de tipo sustantivo, es decir aquellas infracciones a la normativa de fondo aplicada en la DA respectiva, cuyo no es el caso de lo que se denuncia.

Por tal motivo, el primer motivo de ilegalidad no puede prosperar.

SEXTO: En lo atinente al segundo motivo de ilegalidad alegado, siguiendo la doctrina sustentada en los fallos referidos en el considerando cuarto de esa sentencia, las AFP están sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, para lo cual aquellas deben remitir a ésta diversa información que le permite ejercer su función de control.

Dentro de este contexto, de acuerdo al Libro IV, Título VIII, Capítulo II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el Informe Diario que debe ser proporcionado por las AFP a la Superintendencia, está compuesto por un conjunto de datos codificados a través de diversos formularios electrónicos, entre ellos el denominado “D1”, el cual comprende: Balance Diario, Flujo de Caja, Estado de Variación del Patrimonio y otra información general. Por su parte el Libro IV, Título VII, letra C, Capítulo II, Sección II, “Notas Explicativas”, en relación a los estados financieros señala que: *“Los estados financieros de los Fondos de Pensiones deberán ser acompañados por notas explicativas, en adelante notas, las que formarán parte integrante de ellos. Estas notas deberán ser preparadas por la administración de la sociedad y constituyen una relación de antecedentes que aportan información adicional sobre las cifras contenidas en los estados financieros, así como la divulgación de información que no está directamente reflejada en dichos estados, permitiendo de esta manera, una mejor comprensión de éstos y contribuyendo una base objetiva para los usuarios de dicha información”*.

A su vez, el Capítulo IV, letra A, N° 8, al referirse a las “notas explicativas” indica que éstas: *“deberán utilizarse para detallar los movimientos en cualesquiera de las partidas que correspondan a los siguientes ítems: Otros Ingresos, Otros Egresos, Otros Aumentos, Otras Disminuciones, Valores por Depositar Nacionales, Valores por Depositar Extranjeros, Valores en Tránsito, Excesos de Inversión, Provisión Impuestos y Otros, Valor del Patrimonio del Fondo de Pensiones, Provisión por*



inversiones en activos alternativos, Financiamiento de Cargos Bancarios y Cargos Bancarios”.

En consecuencia, de las normas precitadas puede inferirse que la información solicitada, al formar parte de aquella que debe remitirse habitualmente a la Superintendencia de Pensiones, conjuntamente con los estados financieros, es de carácter pública, como se infiere de los artículos 5, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, toda vez que está sometida al rol fiscalizador que debe cumplir a su respecto la referida Superintendencia.

SÉPTIMO: Como tercer motivo de ilegalidad, la AFP reclamante sostiene que las referidas notas explicativas están protegidas por las causales de reserva de información del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la LT, por cuanto (en relación al numeral 2°) la entrega de la información solicitada afecta sus derechos económicos y comerciales, ya que los informes diarios de los fondos de pensiones, las notas explicativas y los balances, constituyen información de su propiedad y de carácter estratégico, cuya divulgación, no solo afectaría a las propias administradoras sino que a todas las personas que se encuentran afiliadas a las mismas. Considera así que se trata de información que contiene las estrategias de inversión de los Fondos de Pensiones e invoca en su favor la normativa que indica.

En relación al N° 5 indica que la información constituye información sensible y de carácter reservado, lo que vincula con los artículos 151 y 154 letra d) del D. L. N° 3.500 citado y 164 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, por lo que la información solicitada puede generar serios perjuicios, tanto a la AFP como a los Fondos que administra.

OCTAVO: Como tantas veces se ha señalado, conforme al artículo 8° de la Constitución Política de la República, complementado por los artículos 10 y 21 de la LT, la publicidad de la información pública constituye la regla general y la reserva, su excepción. Por lo tanto, cuando se invoca la excepción a la regla, ella debe acreditarse en forma fehaciente y los preceptos legales invocados deben interpretarse siempre en forma restrictiva en relación al derecho invocado.

En efecto, el citado artículo 8° de la Carta Fundamental establece lo siguiente: *“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de*



aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

Por su parte el artículo 10 de la LT, prescribe lo siguiente: *“Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo excepciones legales”.*

A su vez, el artículo 21 N° 2 de la LT dispone como causal de reserva de la información *“Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”.*

Por su parte, el N° 5 del artículo 21, dispone como causal de reserva: *“Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política”.*

NOVENO: De las normas precedentes se desprende la publicidad de la información constituye la regla general y la reserva, su excepción, por lo tanto, cuando se invoca la excepción a la regla, ella debe acreditarse en forma fehaciente y los preceptos legales invocados deben interpretarse siempre en forma restrictiva en relación al derecho invocado.

DÉCIMO: Que en lo relativo al artículo 21 N° 2 de la LT cabe destacar que corresponde al reclamante acreditar de qué forma las Notas Explicativas cuya reserva se pretende afectan derechos de carácter comercial o económico.

En este contexto, las notas explicativas permiten, precisamente, “explicar” o entender la información que se contiene en los formularios D1 que la AFP remite a la Superintendencia de Pensiones, es decir, se trata de un accesorio de dicho formulario y por lo tanto corre la misma suerte de ese documento. Siendo así, difícil resulta aceptar su carácter de reservado si estas forman parte del formulario D1 que se encuentra en poder de la



Superintendencia y que además aparece publicado en el sitio web de la referida entidad pública. En consecuencia, no se entiende cómo dicha información que persigue explicar otra que es de carácter pública pueda revestir el carácter de reservada, porque de serlo hace ilusoria la primera. Cabe considerar además, que tratándose de información que está en poder de un órgano de la Administración, como lo es la Superintendencia y considerando que el artículo 10 de la LT desarrolla el principio de publicidad contenido en el artículo 8° de la Carta Política, la información requerida queda comprendida en más de alguno de los vocablos que menciona el mismo artículo por ejemplo “expedientes”, pues sin duda toda la información que la AFP remite a la Superintendencia conforma un expediente relativo a su información financiera o de inversión.

Además, la reclamante tampoco ha demostrado que la publicación de las notas explicativas afecte concretamente derechos comerciales o económicos suyos, siendo sus argumentos verdaderas especulaciones no demostradas fehacientemente, más aún si se considera que la información ordenada entregar es de antigua data y comprende los años 2015 a 2022.

UNDÉCIMO: Que en relación al argumento de la reclamante -vinculado al N° 5 del artículo 21 de la LT y al cuarto motivo de ilegalidad- en cuanto a que la decisión cuestionada es reservada según se infiere de los artículos 151 y 154 del Decreto Ley N° 3500, también corresponde desechar tales planteamientos.

Al respecto cabe señalar que, la primera norma dispone: *“Los directores de una Administradora, sus controladores, sus gerentes, administradores y, en general, cualquier persona que en razón de su cargo o posición tenga acceso a información de las inversiones de los recursos de un Fondo que aún no haya sido divulgada oficialmente al mercado y que por su naturaleza sea capaz de influir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones, deberán guardar estricta reserva respecto de esa información. Las personas a que se refiere este inciso estarán afectas a lo dispuesto en el artículo 166 de la ley N° 18.045”.*

“Asimismo, se prohíbe a las personas mencionadas en el inciso anterior valerse directa o indirectamente de la información reservada, para obtener para sí o para otros, distintos de cualquiera de los Fondos de Pensiones, ventajas mediante la compra o venta de valores”.



“Las personas que participen en las decisiones sobre adquisición, enajenación o mantención de instrumentos para alguno de los Fondos de Pensiones, no podrán comunicar estas decisiones a personas distintas de aquellas que deban participar en la operación por cuenta o en representación de la Administradora o de los Fondos”.

Como se ve, dicha disposición establece una prohibición de difundir información sobre inversiones aún no divulgada al mercado que pueda influir en la cotización de los valores de dicha inversión o pueda implicar ventajas a terceros, que no es el caso de autos, pues aquí se trata de dar a conocer las notas que explican los estados financieros de la AFP en el pasado, es decir, información respecto de la cual ya no se corre el riesgo que la norma intenta bloquear de otorgar ventajas a quien conoce de ella o que pudiera modificar los valores de las inversiones en períodos ya pasados.

En relación al artículo 154 letra d), este artículo dispone que: *“Sin perjuicio de lo establecido los artículos anteriores, son contrarias a la presente ley las siguientes actuaciones u omisiones efectuadas por las Administradoras: d) La comunicación de información esencial relativa a la adquisición, enajenación y mantención de activos por cuenta de cualquiera de los Fondos a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas, en representación de la Administradora”.*

De lo expuesto puede observarse que tampoco esta norma impide la entrega de la información pues se encuentra vinculada a operaciones presentes que se estén desarrollando y no a información pretérita como la que aquí se discute.

DUODÉCIMO: Que también se aludió en el reclamo de ilegalidad al artículo 50 de la Ley N° 20.255; sin embargo, dicha norma cuando habla de confidencialidad y manejo de información privilegiada lo hace en relación a las políticas de solución de conflicto de intereses, que tampoco es el caso que nos ocupa.

Por último, lo relativo al artículo 164 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores no resulta aplicable en la especie, pues dicho precepto alude a la información privilegiada no divulgada al mercado, lo que en el presente caso no sucede, pues las Notas Explicativas son publicadas en la página web de la reclamante.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ETBMXMJZMBY

DECIMOTERCERO: Por último, en lo que concierne al quinto motivo de ilegalidad, esto es que la información ordenada entregar afectaría gravemente distintos derechos constitucionales de la AFP Capital y de los afiliados, tampoco puede tener cabida esa aseveración.

En efecto, de modo alguno puede inferirse que exigir la divulgación de esa información afecte el derecho de la reclamante a desarrollar su actividad económica específica, ya que no hay una relación de causalidad entre ambas circunstancias. El CPLT simplemente ha ordenado que la AFP reclamante haga entrega de la información requerida, pero en caso esa decisión trae como consecuencia que esa institución previsional siga desarrollando sus labores. De todas formas, la alegación de la reclamante resulta exagerada y absurda, por lo que debe ser desestimada.

En cuanto a la supuesta afectación del derecho de propiedad de los antecedentes relativos a la gestión que la AFP realiza, tampoco es acertada dicha tesis, desde que la información cuya publicidad se establece por el CPLT no tiene el efecto de develar sus operaciones en el mercado que permitan predecir sus operaciones e inversiones y lo debatido en la especie no es la propiedad que tenga la AFP sobre esos antecedentes, sino el acceso público a esa información y que fue solicitada para un fin específico dentro de un proceso administrativo.

Del mismo modo, menos puede ponerse en peligro para los afiliados esa información, en cuanto a la titularidad de sus fondos previsionales, quienes no han manifestado aprehensión alguna al respecto, no correspondiendo a la AFP reclamante asumir la representación de éstos, unido a que no se ha acreditado cómo se produciría la supuesta afectación.

En lo atinente a la eventual infracción del derecho de igualdad ante la ley, pugna ese aserto con el mero hecho que las DA recurridas afectaron a todas las AFP, como se deduce del alcance de esas decisiones y de que todas las involucradas hayan recurrido de reclamación de ilegalidad ante esta Corte.

Por último, en lo que guarda relación con afectarse el derecho a la seguridad social, aquello tampoco es efectivo, desde que la AFP parte de una premisa errada, al sostener que esa información es privada, lo que – como ya se razonó más arriba- no es cierto, pues tanto los informes financieros como las Notas Explicativas anexos a aquellos son parte de la



información que deben entregar habitualmente las AFP a la Superintendencia del ramo, por ser sujetos de fiscalización periódica, por lo que tampoco puede prosperar esa alegación.

DECIMOCUARTO: Finalmente, coadyuva a la decisión de publicidad lo dispuesto en el artículo 26 del D.L. 3.500 que prescribe que: *“Toda publicación de la composición de la cartera de inversión de los distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que establezca una norma de carácter general de la Superintendencia. Con todo, esta última podrá publicar la composición de la cartera de inversión agregada de los Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado”*.

En consecuencia, por aplicación de esta norma es evidente que tratándose, en la especie, de publicidad referida a operaciones pretéritas la regla de publicidad es la que rige.

DECIMOQUINTO: En virtud de lo que se ha venido razonando, el reclamo de ilegalidad debe ser desestimado al no infringirse las normas que acusa la reclamante en la decisión de amparo impugnada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República y en los artículos 5, 10, 11 letra c) y 28 de la Ley N° 20.285, Ley de Transparencia, **se rechaza**, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido por Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. en contra de la Decisión de Amparo N° C-11749-22 pronunciada por el Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023

Se previene que la abogada integrante Sra. Catalina Infante Correa estuvo por condenar en costas a la reclamante.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Contencioso Administrativo-253-2023.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gay Gariazzo y por la Abogada Integrante señora Catalina Infante Correa. No firman el Ministro señor Mera ni la Abogada señora Infante por encontrarse ausentes.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ETBMXMJZMBY



Tomás Guillermo Gray Gariazzo

Ministro

Corte de Apelaciones

Quince de abril de dos mil veinticuatro
13:07 UTC-4



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ETBMXMJZMBY

Proveído por el Señor Presidente de la Séptima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a quince de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ETBMXMJZMBY

C.A. de Santiago

Santiago, quince de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen Gonzalo Alfredo Cordero Arce y Juan Ignacio Eymin Ahumada, abogados, en representación de **Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.**, y deducen reclamo de ilegalidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 y siguientes de la ley 20.285 (en adelante también “Ley de Transparencia” o “LT”) en contra de las Decisiones de Amparo (en adelante “DA”) pronunciadas por el **Consejo para la Transparencia** (en adelante “CPLT”) en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023, en cuya virtud acogió el amparo interpuesto por doña Hilda Isabel Olivares Leiva en contra de la Superintendencia de Pensiones. Solicita que se acoja el reclamo, declarando la ilegalidad de las decisiones de amparo, con costas.

Sostienen que el 7 de noviembre de 2022, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva solicitó a la Superintendencia de Pensiones la siguiente información: “notas explicativas de los informes diarios de todas las administradoras de fondos de pensiones, comprendidas entre el 01 de enero de 2015 hasta 01 enero del año 2022”. La Superintendencia confirió traslado a las AFP, las que se opusieron, por lo que el organismo denegó la información requerida, en los términos dispuestos por el inciso 3° del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva dedujo reclamo ante el CPLT solicitando amparo a su derecho a la información, el que fue acogido por dicho organismo.

Argumentan que la decisión reclamada debe ser dejada sin efecto, por cuanto se funda en normas que consistentemente han sido declaradas inaplicables por inconstitucionales por el Excmo. Tribunal Constitucional, vicio que también se ha producido en este caso, por lo que no deben ser aplicadas, en este caso, los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia.

Agregan que la decisión reclamada, en cuanto ordena entregar las notas explicativas de los informes diarios, es ilegal al vulnerar la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Al respecto, sostiene que la información requerida es secreta, ha sido objeto de razonables esfuerzos por mantener su secreto, y tiene un valor comercial *per*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DYYRXMGZMBY

se por ser secreta, de lo contrario no se explica que el legislador estableciera deberes de reserva por su potencial influencia en el mercado de capitales.

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicitan que se acoja el reclamo y, consecuentemente, se deje sin efecto la Decisión Reclamada y se rechace íntegramente el recurso de amparo antes señalado, ordenando que se deniegue el acceso a la información solicitada por los motivos expresados, con costas.

SEGUNDO: Que informó el Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del reclamo, con costas.

Luego de reseñar los principales hitos de la tramitación del amparo interpuesto y los argumentos de la AFP reclamante, sostiene que la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP ha sido ratificada reiteradamente por la jurisprudencia emanada de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema, en las sentencias que cita.

Expone que la información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República y artículos 5°, 10 y 11 letra c) de la LT, aunque haya sido generada por las AFP, pues obra en poder de la Superintendencia de Pensiones en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, formando parte de expedientes administrativos y ha servido de fundamento a resoluciones del mismo carácter.

Asevera que la entrega de la información que se ha ordenado proporcionar en la Decisión de Amparo reclamada, no afecta los derechos económicos ni comerciales de la AFP reclamante, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Añade que el artículo 50 de la ley 20.255, el artículo 151 del D.L. 3.500 y el artículo 164 de la ley 18.045 no constituyen leyes de quórum calificado que establezcan la reserva de las notas explicativas.

Por último, estima que no procede la condena en costas al Consejo en la resolución de los reclamos de ilegalidad.

Pide el rechazo del reclamo de ilegalidad planteado por AFP Cuprum S.A., con costas.

TERCERO: Como puede derivarse de lo anterior, la AFP reclamante plantea dos aspectos de presunta ilegalidad: a) La DA del CPLT se funda en



normas que han sido declaradas inaplicables por inconstitucionales por el Excmo. Tribunal Constitucional, vicio que también se ha producido en este caso, por lo que no deben ser aplicadas, y b) La información solicitada es objeto de la reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la LT.

CUARTO: Que tal como lo sostiene el Consejo para la Transparencia, el tema que ha sido sujeto al escrutinio judicial en esta causa ya ha sido resuelto por la judicatura en las causas aludidas por dicha institución.

En primer lugar, cabe citar el reclamo deducido por la Superintendencia de Pensiones en causa Rol 10.390-2017, en la que se hicieron partes como coadyuvantes de la Superintendencia las AFP Habitat, Modelo y Plan Vital, dictándose sentencia definitiva el 12 de noviembre de 2018, ejecutoriada, que rechazó el reclamo, el que se fundaba en los mismos argumentos ahora esgrimidos por la AFP reclamante.

Lo mismo sucedió con las sentencias dictadas con fecha 29 de julio de 2021 en las causas Roles 583-2019, 585-2019, y 591-2019, en virtud de reclamos interpuestos por AFP Capital, Modelo, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte, rechazando los reclamos. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja mediante autos Rol N° 53.109-2021, el cual fue declarado inadmisibile por la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 31 de agosto de 2021. Luego, el CPLT con fecha 31 de marzo de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C7534-19 (que dispuso la entrega de copia de las notas explicativas de los informes diarios D1 de las AFP, desde el año 2002 hasta septiembre de 2019), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad en las causas Roles N° 189-2020, 213-2020, y 214-2020, interpuestos por AFP Modelo, Capital, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas con fecha 8 de junio de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad antes mencionados.

Posteriormente, el CPLT con fecha 9 de abril de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C2270-19 (que dispuso la entrega de copia de los informes diarios de los fondos de pensiones de los meses de junio a octubre del año 2008, como asimismo, las notas explicativas y balances), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad Roles N° 226-2020, 235-2020, y 238-2020, interpuestos por AFP Modelo, Provida, y Capital, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas



con fecha 2 de agosto de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja mediante autos Rol N° 56.177-2021, el cual fue declarado inadmisibile por la Excm. Corte Suprema en sentencia de fecha 19 de agosto de 2021.

Luego, es doctrina ya asentada por esta Corte de Apelaciones y por la Excm. Corte Suprema, la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP.

QUINTO: En cuanto al primer aspecto del reclamo, cabe recordar que no corresponde que la parte reclamante se asile en las sentencias pronunciadas por el Excmo. Tribunal Constitucional para sustentar sus alegaciones, por cuanto éstas no se pueden aplicar por analogía al caso sub lite. En efecto, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad se juzga en razón de la aplicación de las normas al caso concreto.

Además, el artículo 92 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, establece lo siguiente: *“La sentencia que declare la inaplicabilidad solo producirá efectos en el juicio en que se solicite”*. De esta forma, las sentencias citadas por la reclamante solo tuvieron efecto en las gestiones judiciales correspondientes a esos casos, y dado que en la especie no se recurrió de inaplicabilidad ante el Excmo. Tribunal Constitucional, esta Corte de Apelaciones no tiene impedimento jurídico alguno para aplicar todas las normas de la LT.

En consecuencia, las sentencias dictadas por el Excmo. Tribunal Constitucional solo producen efectos en las causas en que se pidió ese requerimiento, razón suficiente para desestimar la interpretación analógica que formula la reclamante.

SEXTO: En lo que concierne al segundo motivo de ilegalidad, la AFP reclamante sostiene que las referidas notas explicativas están amparadas por la causal de reserva de información del artículo 21 N° 2 de la LT, por cuanto la entrega de la información solicitada afecta sus derechos económicos y comerciales, ya que los informes diarios de los fondos de pensiones, las notas explicativas y los balances, constituyen información de su propiedad y de carácter estratégico, cuya divulgación, no solo afectaría a las propias administradoras sino que a todas las personas que se encuentran afiliadas a las mismas. Considera así que se trata de información que



contiene las estrategias de inversión de los Fondos de Pensiones e invoca en su favor la normativa que indica.

SÉPTIMO: Como tantas veces se ha señalado, conforme al artículo 8° de la Constitución Política de la República, complementado por los artículos 10 y 21 de la LT, la publicidad de la información pública constituye la regla general y la reserva, su excepción. Por lo tanto, cuando se invoca la excepción a la regla, ella debe acreditarse en forma fehaciente y los preceptos legales invocados deben interpretarse siempre en forma restrictiva en relación al derecho invocado.

En efecto, el citado artículo 8° de la Carta Fundamental establece lo siguiente: *“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”*.

Por su parte el artículo 10 de la LT, prescribe lo siguiente: *“Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo excepciones legales”*.

A su vez, el artículo 21 N° 2 de la LT dispone como causal de reserva de la información *“Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”*.

OCTAVO: En consecuencia, la publicidad de la información constituye la regla general y la reserva, su excepción, por lo tanto, cuando se invoca la excepción a la regla, ella debe acreditarse en forma fehaciente y los preceptos legales invocados deben interpretarse siempre en forma restrictiva en relación al derecho invocado.



NOVENO: Que las notas explicativas permiten, precisamente, “explicar” o entender la información que se contiene en los formularios D1 que la AFP remite a la Superintendencia de Pensiones, es decir, se trata de un accesorio de dicho formulario y por lo tanto corre la misma suerte de ese documento. Siendo así, difícil resulta aceptar su carácter de reservado si estas forman parte del formulario D1 que se encuentra en poder de la Superintendencia y que además aparece publicado en el sitio web de la referida entidad pública. En consecuencia, no se entiende cómo dicha información que persigue explicar otra que es de carácter pública pueda revestir el carácter de reservada, porque de serlo hace ilusoria la primera. Cabe considerar además, que tratándose de información que está en poder de un órgano de la Administración, como lo es la Superintendencia y considerando que el artículo 10 de la LT desarrolla el principio de publicidad contenido en el artículo 8° de la Carta Política, la información requerida queda comprendida en más de alguno de los vocablos que menciona el mismo artículo por ejemplo “expedientes”, pues sin duda toda la información que la AFP remite a la Superintendencia conforma un expediente relativo a su información financiera o de inversión.

Por otra parte, la reclamante tampoco ha demostrado que la publicación de las notas explicativas afecte concretamente derechos comerciales o económicos suyos, siendo sus argumentos verdaderas especulaciones no demostradas fehacientemente, más aún si se considera que la información ordenada entregar es de antigua data y comprende los años 2015 a 2022.

DÉCIMO: Que además, la reclamante tampoco ha demostrado que la publicación de las notas explicativas afecte concretamente derechos comerciales o económicos suyos, siendo sus argumentos verdaderas especulaciones no demostradas fehacientemente, más aún si se considera que la información ordenada entregar es de antigua data y comprende los años 2015 a 2022.

UNDÉCIMO: Finalmente, coadyuva la decisión de publicidad lo dispuesto en el artículo 26 del D.L. 3.500 que prescribe que: *“Toda publicación de la composición de la cartera de inversión de los distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto mes precedente. El*



contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que establezca una norma de carácter general de la Superintendencia. Con todo, esta última podrá publicar la composición de la cartera de inversión agregada de los Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado”. En consecuencia, por aplicación de esta norma es evidente que tratándose, en la especie, de publicidad referida a operaciones pretéritas la regla de publicidad es la que rige.

DUODÉCIMO: Por lo antes razonado, el reclamo de ilegalidad debe ser rechazado al no infringirse las normas que acusa la reclamante en la decisión de amparo impugnada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República y en los artículos 5, 10, 11 letra c) y 28 de la Ley N° 20.285, Ley de Transparencia, **se rechaza**, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido por Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. en contra de la Decisión de Amparo respectiva, pronunciada por el Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023


Se previene que la abogada integrante Sra. Catalina Infante Correa estuvo por condenar en costas a la reclamante.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Contencioso Administrativo-233-2023.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gay Gariazzo y por la Abogada Integrante señora Catalina Infante Correa. No firman el Ministro señor Mera ni la Abogada señora Infante por encontrarse ausentes.



Tomás Guillermo Gray Gariazzo
Ministro
Corte de Apelaciones
Quince de abril de dos mil veinticuatro
13:07 UTC-4



Proveído por el Señor Presidente de la Séptima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a quince de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DYYRXMGZMBY

C.A. de Santiago

Santiago, quince de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Cristóbal Ramírez Puyol, abogado, en representación de **Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.**, y deduce reclamo de ilegalidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 y siguientes de la ley 20.285 (en adelante también “Ley de Transparencia” o “LT”) en contra de la Decisión de Amparo (en adelante “DA”) C-11753-22 pronunciada por el **Consejo para la Transparencia** (en adelante “CPLT”) en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023, en cuya virtud acogió el amparo interpuesto por doña Hilda Isabel Olivares Leiva en contra de la Superintendencia de Pensiones. Solicita que se acoja el reclamo, declarando la ilegalidad de la decisión de amparo, con costas.

Sostiene que el 7 de noviembre de 2022, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva solicitó a la Superintendencia de Pensiones la siguiente información: “notas explicativas de los informes diarios de todas las administradoras de fondos de pensiones, comprendidas entre el 01 de enero de 2015 hasta 01 enero del año 2022”. La Superintendencia confirió traslado a las AFP, las que se opusieron, por lo que el organismo denegó la información requerida, en los términos dispuestos por el inciso 3° del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva dedujo reclamo ante el CPLT solicitando amparo a su derecho a la información, el que fue acogido por dicho organismo.

Argumenta que la decisión reclamada debe ser dejada sin efecto, por cuanto la información a la que mediante ella se permite acceder, no es información pública o de una entidad pública, sino que constituye información privada, originada en una institución privada, y cuyo titular es una entidad privada, la que se pone en conocimiento de la Superintendencia para efectos de fiscalización.

A lo anterior añade que la información a la que mediante la Decisión de Amparo se permite acceder, constituye información sensible y de carácter reservado y, por lo tanto, debe entenderse incluida en la causal de reserva del numeral 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Agrega que se afecta el derecho a la seguridad social y el derecho de propiedad que corresponde a los trabajadores en cuanto titulares finales de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BCLPXMEZMBY

los Fondos de Pensiones que administra AFP Habitat, así como el derecho de propiedad de AFP Habitat sobre los antecedentes relativos a la gestión que realiza.

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicita que se acoja el reclamo y, en consecuencia, deje sin efecto la antes indicada decisión final y, en su lugar, resuelva que se rechaza el amparo deducido por doña Hilda Isabel Olivares Leiva, todo con costas.

SEGUNDO: Que informó el Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del reclamo, con costas.

Luego de reseñar los principales hitos de la tramitación del amparo interpuesto y los argumentos de la AFP reclamante, sostiene que la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP ha sido ratificada reiteradamente por la jurisprudencia emanada de esta Corte y de la Excm. Corte Suprema, en las sentencias que cita.

Expone que la información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República y artículos 5°, 10 y 11 letra c) de la LT, aunque haya sido generada por las AFP, pues obra en poder de la Superintendencia de Pensiones en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, formando parte de expedientes administrativos y ha servido de fundamento a resoluciones del mismo carácter.

Asevera que la entrega de la información que se ha ordenado proporcionar en la Decisión de Amparo reclamada, no afecta los derechos económicos ni comerciales de la AFP reclamante, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Añade que el artículo 50 de la ley 20.255, el artículo 151 del D.L. 3.500 y el artículo 164 de la ley 18.045 no constituyen leyes de quórum calificado que establezcan la reserva de las notas explicativas.

Por último, estima que no procede la condena en costas al Consejo en la resolución de los reclamos de ilegalidad.

Pide el rechazo del reclamo de ilegalidad planteado por AFP Habitat S.A., con costas.

TERCERO: Como puede derivarse de lo anterior, la AFP reclamante plantea cuatro tópicos de presunta ilegalidad: a) Que la información solicitada



no es pública o de una entidad pública, sino que constituye información privada, originada en una institución privada, cuyo titular es esa institución privada; b) La información solicitada es sensible y de carácter reservado y está incluida en la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la LT; c) Se afecta el derecho a la seguridad social y el derecho de propiedad que corresponde a los trabajadores en cuanto titulares finales de los Fondos de Pensiones de administra AFP Habitat y d) Divulgación de la información solicitada afecta el derecho de propiedad de AFP Habitat S.A. sobre los antecedentes relativos a la gestión que realiza.

CUARTO: Que tal como lo sostiene el Consejo para la Transparencia, el tema que ha sido sujeto al escrutinio judicial en esta causa ya ha sido resuelto por la judicatura en las causas aludidas por dicha institución.

En primer lugar, cabe citar el reclamo deducido por la Superintendencia de Pensiones en causa Rol 10.390-2017, en la que se hicieron partes como coadyuvantes de la Superintendencia las AFP Habitat, Modelo y Plan Vital, dictándose sentencia definitiva el 12 de noviembre de 2018, ejecutoriada, que rechazó el reclamo, el que se fundaba en los mismos argumentos ahora esgrimidos por la AFP reclamante.

Lo mismo sucedió con las sentencias dictadas con fecha 29 de julio de 2021 en las causas Roles 583-2019, 585-2019, y 591-2019, en virtud de reclamos interpuestos por AFP Capital, Modelo, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte, rechazando los reclamos. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja mediante autos Rol N° 53.109-2021, el cual fue declarado inadmisibile por la Excm. Corte Suprema en sentencia de fecha 31 de agosto de 2021. Luego, el CPLT con fecha 31 de marzo de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C7534-19 (que dispuso la entrega de copia de las notas explicativas de los informes diarios D1 de las AFP, desde el año 2002 hasta septiembre de 2019), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad en las causas Roles N° 189-2020, 213-2020, y 214-2020, interpuestos por AFP Modelo, Capital, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas con fecha 8 de junio de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad antes mencionados.

Posteriormente, el CPLT con fecha 9 de abril de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C2270-19 (que dispuso la entrega de copia de los



informes diarios de los fondos de pensiones de los meses de junio a octubre del año 2008, como asimismo, las notas explicativas y balances), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad Roles N° 226-2020, 235-2020, y 238-2020, interpuestos por AFP Modelo, Provida, y Capital, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas con fecha 2 de agosto de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja mediante autos Rol N° 56.177-2021, el cual fue declarado inadmisibile por la Excm. Corte Suprema en sentencia de fecha 19 de agosto de 2021.

Luego, es doctrina ya asentada por esta Corte de Apelaciones y por la Excm. Corte Suprema, la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP.

QUINTO: Siguiendo la doctrina sustentada en los fallos referidos, en cuanto al primer motivo de ilegalidad antes referido, las AFP están sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, para lo cual aquellas deben remitir a ésta diversa información que le permite ejercer su función de control. Dentro de este contexto, de acuerdo al Libro IV, Título VIII, Capítulo II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el Informe Diario que debe ser proporcionado por las AFP a la Superintendencia, está compuesto por un conjunto de datos codificados a través de diversos formularios electrónicos, entre ellos el denominado “D1”, el cual comprende: Balance Diario, Flujo de Caja, Estado de Variación del Patrimonio y otra información general. Por su parte el Libro IV, Título VII, letra C, Capítulo II, Sección II, “Notas Explicativas”, en relación a los estados financieros señala que: *“Los estados financieros de los Fondos de Pensiones deberán ser acompañados por notas explicativas, en adelante notas, las que formarán parte integrante de ellos. Estas notas deberán ser preparadas por la administración de la sociedad y constituyen una relación de antecedentes que aportan información adicional sobre las cifras contenidas en los estados financieros, así como la divulgación de información que no está directamente reflejada en dichos estados, permitiendo de esta manera, una mejor comprensión de éstos y contribuyendo una base objetiva para los usuarios de dicha información”*.

A su vez, el Capítulo IV, letra A, N° 8, al referirse a las “notas explicativas” indica que éstas: *“deberán utilizarse para detallar los*



movimientos en cualesquiera de las partidas que correspondan a los siguientes ítems: Otros Ingresos, Otros Egresos, Otros Aumentos, Otras Disminuciones, Valores por Depositar Nacionales, Valores por Depositar Extranjeros, Valores en Tránsito, Excesos de Inversión, Provisión Impuestos y Otros, Valor del Patrimonio del Fondo de Pensiones, Provisión por inversiones en activos alternativos, Financiamiento de Cargos Bancarios y Cargos Bancarios”.

En consecuencia, de las normas precitadas puede inferirse que la información solicitada, al formar parte de aquella que debe remitirse habitualmente a la Superintendencia de Pensiones, conjuntamente con los estados financieros, es de carácter pública, como se infiere de los artículos 5, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia.

SEXTO: En lo atinente al segundo motivo de ilegalidad, la reclamante de ilegalidad sostiene que las referidas notas explicativas están amparadas por las causales de reserva de información del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la LT, por cuanto la entrega de la información solicitada implica dar a conocer la operatoria que define AFP Hábitat para realizar sus inversiones, todas las cuales se han realizado conforme a lo que la ley establece, información que no es solo de propiedad de la AFP, sino que los Fondos son de sus afiliados y está protegida por la Ley N° 19.628.

Debe desecharse dicho motivo de ilegalidad, pues en parte alguna de su reclamo, la AFP desarrolla o fundamenta de qué modo se infringe la causal de reserva, en sus dos vertientes. En efecto, aparte de citar la disposición y un fallo de la Excma. Corte Suprema, no pormenoriza la razón en que la mentada información estaría protegida por las causales de reserva que invoca. Esto es determinante para el rechazo de esta alegación, pues ambas causales de reserva esgrimidas tienen varias hipótesis y la reclamante no precisa a cuáles corresponden los casos que denuncia.

SÉPTIMO: Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a la reserva del N° 2 del artículo 21 LT, como lo ha sostenido en forma invariable la jurisprudencia, aquello exige acreditar hechos que deben prevalecer sobre los principios de publicidad y transparencia, de modo tal que ha de preferirse el interés particular del reclamante por sobre aquel de carácter público que la norma constitucional consagra (Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, 1° de junio de 2017, Rol 509-2017).



Por lo mismo, tal como lo ha indicado la jurisprudencia del CPLT, para que dicha causal pueda prosperar, es necesario que la información cumpla con tres requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva.

Ninguno de estos aspectos es desarrollado por la reclamante, lo que basta para desechar esa causal de reserva, como ya se indicó.

OCTAVO: En lo que se refiere al N° 5 del citado artículo 21 LT, lo cierto es que conforme a los antecedentes proporcionados por el CPLT y la Decisión de Amparo respectiva, queda claro que esa causal de reserva no fue objeto de la oposición planteada en sede administrativa por la reclamante, motivo por el órgano reclamado no se pronunció al respecto, al evacuar el informe. Por lo mismo, infringiendo esa alegación el principio de congruencia, no corresponde hacerse cargo de esa causal de reserva.

NOVENO: A mayor abundamiento, las notas explicativas permiten, precisamente, “explicar” o entender la información que se contiene en los formularios D1 que la AFP remite a la Superintendencia de Pensiones, es decir, se trata de un accesorio de dicho formulario y por lo tanto corre la misma suerte de ese documento. Siendo así, difícil resulta aceptar su carácter de reservado si estas forman parte del formulario D1 que se encuentra en poder de la Superintendencia y que además aparece publicado en el sitio web de la referida entidad pública. En consecuencia, no se entiende cómo dicha información que persigue explicar otra que es de carácter pública pueda revestir el carácter de reservada, porque de serlo hace ilusoria la primera. Cabe considerar además, que tratándose de información que está en poder de un órgano de la Administración, como lo es la Superintendencia y considerando que el artículo 10 de la LT desarrolla el principio de publicidad contenido en el artículo 8° de la Carta Política, la información requerida queda comprendida en más de alguno de los vocablos que menciona el mismo artículo por ejemplo “expedientes”, pues sin duda toda la información que la AFP remite a la Superintendencia conforma un expediente relativo a su información financiera o de inversión.



DÉCIMO: En relación al tercer motivo de ilegalidad, la reclamante no ha demostrado en que forma la divulgación de la información afecta el derecho a la seguridad social de sus afiliados o la propiedad estos sobre la propiedad de sus fondos, siendo sus argumentos no más que verdaderas especulaciones no demostradas fehacientemente, más aún si se considera que la información ordenada entregar es de antigua data y comprende los años 2015 a 2022.

Por otra parte, coadyuva a la decisión de publicidad lo dispuesto en el artículo 26 del D.L. 3.500 citado, el cual establece que: *“Toda publicación de la composición de la cartera de inversión de los distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que establezca una norma de carácter general de la Superintendencia. Con todo, esta última podrá publicar la composición de la cartera de inversión agregada de los Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado”*. En consecuencia, por aplicación de esta norma es evidente que tratándose, en la especie, de publicidad referida a operaciones pretéritas la regla de publicidad es la que rige.

UNDÉCIMO: Finalmente, en lo relativo al último motivo de ilegalidad, esto es que la Decisión de Amparo impugnada vulnera el derecho de propiedad de la AFP, tampoco es acertada dicha tesis, desde que la información cuya publicidad se establece por el CPLT no tiene el efecto de develar sus operaciones en el mercado que permitan predecir sus operaciones e inversiones y lo debatido en la especie no es la propiedad que tenga la AFP sobre esos antecedentes, sino el acceso público a esa información y que fue solicitada para un fin específico dentro de un proceso administrativo.

DUODÉCIMO: Que así, el reclamo de ilegalidad debe ser desestimado al no infringirse las normas que denuncia la AFP reclamante en la decisión de amparo impugnada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República y en los artículos 5, 10, 11 letra c) y 28 de la Ley N° 20.285, Ley de Transparencia, se **rechaza**, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido por Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. en contra de la Decisión de Amparo N° C-11753-22 pronunciada



por el Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023


Se previene que la abogada integrante Sra. Catalina Infante Correa estuvo por condenar en costas a la reclamante.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Contencioso Administrativo-231-2023.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gay Gariazzo y por la Abogada Integrante señora Catalina Infante Correa. No firman el Ministro señor Mera ni la Abogada señora Infante por encontrarse ausentes.



Tomás Guillermo Gray Gariazzo
Ministro
Corte de Apelaciones
Quince de abril de dos mil veinticuatro
13:07 UTC-4



Proveído por el Señor Presidente de la Séptima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a quince de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BCLPXMEZMBY

C.A. de Santiago

Santiago, quince de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de **Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.**, y deduce reclamo de ilegalidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 y siguientes de la ley 20.285 (en adelante también “Ley de Transparencia” o “LT”) en contra de las Decisiones de Amparo (en adelante “DA”) pronunciadas por el **Consejo para la Transparencia** (en adelante “CPLT”) en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023, en cuya virtud acogió el amparo interpuesto por doña Hilda Isabel Olivares Leiva en contra de la Superintendencia de Pensiones. Solicita que se acoja el reclamo, declarando la ilegalidad de la decisión de amparo, con costas.

Sostiene que el 7 de noviembre de 2022, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva solicitó a la Superintendencia de Pensiones la siguiente información: “notas explicativas de los informes diarios de todas las administradoras de fondos de pensiones, comprendidas entre el 01 de enero de 2015 hasta 01 enero del año 2022”. La Superintendencia confirió traslado a las AFP, las que se opusieron, por lo que el organismo denegó la información requerida, en los términos dispuestos por el inciso 3° del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva dedujo reclamo ante el CPLT solicitando amparo a su derecho a la información, el que fue acogido por dicho organismo.

Argumenta que la decisión reclamada debe ser dejada sin efecto, por cuanto las AFP no son sujetos obligados por la ley 20.285. Sin perjuicio, asevera que la información requerida no es pública, no se ha financiado con presupuesto público, no ha servido de base a la dictación de un acto administrativo, ni tampoco es información de una entidad pública. Por el contrario, se trata de información privada, la cual es emitida por una institución privada, su titular es AFP Modelo, una entidad privada quien le entrega esta información a la Superintendencia de Pensiones con el único propósito de que ésta ejerza sus facultades legales de fiscalización el que se encuentra establecido dentro del marco del ordenamiento jurídico vigente.

Sostiene que la información requerida constituye información sensible y reservada en virtud de los numerales 5 y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, y añade que la entrega afectaría su derecho de propiedad.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXYXXMFZMBY

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicita que se acoja el reclamo y, en consecuencia, se rechace el amparo deducido por la señora Hilda Olivares Leiva, con costas.

SEGUNDO: Que informó el Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del reclamo, con costas.

Luego de reseñar los principales hitos de la tramitación del amparo interpuesto y los argumentos de la AFP reclamante, sostiene que la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP ha sido ratificada reiteradamente por la jurisprudencia emanada de esta Corte y de la Excm. Corte Suprema, en las sentencias que cita.

Expone que la información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República y artículos 5°, 10 y 11 letra c) de la LT, aunque haya sido generada por las AFP, pues obra en poder de la Superintendencia de Pensiones en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, formando parte de expedientes administrativos y ha servido de fundamento a resoluciones del mismo carácter.

Asevera que la entrega de la información que se ha ordenado proporcionar en la Decisión de Amparo reclamada, no afecta los derechos económicos ni comerciales de la AFP reclamante, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Añade que el artículo 50 de la ley 20.255, el artículo 151 del D.L. 3.500 y el artículo 164 de la ley 18.045 no constituyen leyes de quórum calificado que establezcan la reserva de las notas explicativas.

Por último, estima que no procede la condena en costas al Consejo en la resolución de los reclamos de ilegalidad.

Pide el rechazo del reclamo de ilegalidad planteado por AFP Modelo S.A., con costas.

TERCERO: Como puede derivarse de lo anterior, la AFP reclamante plantea cuatro tópicos de presunta ilegalidad: a) Ámbito de aplicación de la Ley N° 20.285, sosteniendo que su representada no es sujeto pasivo de esa normativa; b) Información requerida no es pública; c) La información solicitada es objeto de la reserva contenida en el artículo 21 numerales 2 y 5 de la LT y d) Divulgación de la información solicitada afecta el derecho de propiedad de AFP Modelo S.A., conforme al artículo 50 de la Ley N° 20.255.



CUARTO: Tal como lo sostiene el CPLT, el tema objeto del presente reclamo ya ha sido resuelto por la judicatura en las causas aludidas por dicha institución.

En primer lugar, cabe citar el reclamo deducido por la Superintendencia de Pensiones en causa Rol 10.390-2017, en la que se hicieron partes como coadyuvantes de la Superintendencia las AFP Habitat, Modelo y Plan Vital, dictándose sentencia definitiva el 12 de noviembre de 2018, ejecutoriada, que rechazó el reclamo, el que se fundaba en los mismos argumentos ahora esgrimidos por la AFP reclamante.

Lo mismo sucedió con las sentencias dictadas con fecha 29 de julio de 2021 en las causas Roles 583-2019, 585-2019, y 591-2019, en virtud de reclamos interpuestos por AFP Capital, Modelo, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte, rechazando los reclamos. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja mediante autos Rol N° 53.109-2021, el cual fue declarado inadmisibile por la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 31 de agosto de 2021. Luego, el CPLT con fecha 31 de marzo de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C7534-19 (que dispuso la entrega de copia de las notas explicativas de los informes diarios D1 de las AFP, desde el año 2002 hasta septiembre de 2019), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad en las causas Roles N° 189-2020, 213-2020, y 214-2020, interpuestos por AFP Modelo, Capital, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas con fecha 8 de junio de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad antes mencionados.

Posteriormente, el CPLT con fecha 9 de abril de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C2270-19 (que dispuso la entrega de copia de los informes diarios de los fondos de pensiones de los meses de junio a octubre del año 2008, como asimismo, las notas explicativas y balances), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad Roles N° 226-2020, 235-2020, y 238-2020, interpuestos por AFP Modelo, Provida, y Capital, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas con fecha 2 de agosto de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja mediante autos Rol N° 56.177-2021, el cual fue declarado inadmisibile por la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 19 de agosto de 2021.



Luego, es doctrina ya asentada por esta Corte de Apelaciones y por la Excma. Corte Suprema, la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP.

QUINTO: Siguiendo la doctrina sustentada en los fallos referidos, en lo que se refiere a los dos primeros motivos de ilegalidad deducidos en el reclamo -esto es que la LT no es aplicable a las AFP y que la información solicitada no es pública- cabe señalar que las AFP están sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, para lo cual aquellas deben remitir a ésta diversa información que le permite ejercer su función de control.

Dentro de este contexto, de acuerdo al Libro IV, Título VIII, Capítulo II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el Informe Diario que debe ser proporcionado por las AFP a la Superintendencia, está compuesto por un conjunto de datos codificados a través de diversos formularios electrónicos, entre ellos el denominado “D1”, el cual comprende: Balance Diario, Flujo de Caja, Estado de Variación del Patrimonio y otra información general. Por su parte el Libro IV, Título VII, letra C, Capítulo II, Sección II, “Notas Explicativas”, en relación a los estados financieros señala que: *“Los estados financieros de los Fondos de Pensiones deberán ser acompañados por notas explicativas, en adelante notas, las que formarán parte integrante de ellos. Estas notas deberán ser preparadas por la administración de la sociedad y constituyen una relación de antecedentes que aportan información adicional sobre las cifras contenidas en los estados financieros, así como la divulgación de información que no está directamente reflejada en dichos estados, permitiendo de esta manera, una mejor comprensión de éstos y contribuyendo una base objetiva para los usuarios de dicha información”*.

A su vez, el Capítulo IV, letra A, N° 8, al referirse a las “notas explicativas” indica que éstas: *“deberán utilizarse para detallar los movimientos en cualesquiera de las partidas que correspondan a los siguientes ítems: Otros Ingresos, Otros Egresos, Otros Aumentos, Otras Disminuciones, Valores por Depositar Nacionales, Valores por Depositar Extranjeros, Valores en Tránsito, Excesos de Inversión, Provisión Impuestos y Otros, Valor del Patrimonio del Fondo de Pensiones, Provisión por inversiones en activos alternativos, Financiamiento de Cargos Bancarios y Cargos Bancarios”*.



En consecuencia, de las normas precitadas puede inferirse que la información solicitada, al formar parte de aquella que debe remitirse habitualmente a la Superintendencia de Pensiones, conjuntamente con los estados financieros, AFP Modelo es sujeto pasivo de la Ley de Transparencia, razón por lo que la información solicitada es de carácter pública, como se infiere de los artículos 5, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia.

SEXTO: En lo atinente al tercer motivo de ilegalidad, la reclamante de ilegalidad sostiene que las referidas notas explicativas están amparadas por las causales de reserva de información del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la LT, por cuanto la entrega de la información solicitada implica dar a conocer la operatoria que define AFP Modelo para realizar sus inversiones, todas las cuales se han realizado conforme a lo que la ley establece.

En cuanto a la reserva del N° 2 del artículo 21 LT, como lo ha sostenido en forma invariable la jurisprudencia, aquello exige acreditar hechos que deben prevalecer sobre los principios de publicidad y transparencia, de modo tal que ha de preferirse el interés particular del reclamante por sobre aquel de carácter público que la norma constitucional consagra (Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, 1° de junio de 2017, Rol 509-2017).

Por lo mismo, tal como lo ha indicado la jurisprudencia del CPLT, para que dicha causal pueda prosperar, es necesario que la información cumpla con tres requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva.

Ninguno de estos aspectos es desarrollado por la AFP reclamante, lo que basta para desechar esa causal de reserva.

SÉPTIMO: En lo que se refiere al N° 5 del citado artículo 21 LT, lo cierto es que conforme a los antecedentes proporcionados por el CPLT y la Decisión de Amparo respectiva, queda claro que esa causal de reserva no fue objeto de la oposición planteada en sede administrativa por la reclamante, motivo por el órgano reclamado no se pronunció al respecto, al



evacuar el informe. Por lo mismo, infringiendo esa alegación el principio de congruencia, no corresponde hacerse cargo de esa causal de reserva.

OCTAVO: A mayor abundamiento, las notas explicativas permiten, precisamente, “explicar” o entender la información que se contiene en los formularios D1 que la AFP remite a la Superintendencia de Pensiones, es decir, se trata de un accesorio de dicho formulario y por lo tanto corre la misma suerte de ese documento. Siendo así, difícil resulta aceptar su carácter de reservado si estas forman parte del formulario D1 que se encuentra en poder de la Superintendencia y que además aparece publicado en el sitio web de la referida entidad pública.

En consecuencia, no se entiende cómo dicha información que persigue explicar otra que es de carácter pública pueda revestir el carácter de reservada, porque de serlo hace ilusoria la primera. Cabe considerar además, que tratándose de información que está en poder de un órgano de la Administración, como lo es la Superintendencia y considerando que el artículo 10 de la LT desarrolla el principio de publicidad contenido en el artículo 8° de la Carta Política, la información requerida queda comprendida en más de alguno de los vocablos que menciona el mismo artículo por ejemplo “expedientes”, pues sin duda toda la información que la AFP remite a la Superintendencia conforma un expediente relativo a su información financiera o de inversión.

NOVENO: Que además, la reclamante tampoco ha demostrado que la publicación de las notas explicativas afecte concretamente derechos comerciales o económicos suyos, siendo sus argumentos verdaderas especulaciones no demostradas fehacientemente, más aún si se considera que la información ordenada entregar es de antigua data y comprende los años 2015 a 2022.

DÉCIMO: En relación al último motivo de ilegalidad, concerniente a que se afectaría el derecho de propiedad de la AFP reclamante, se aludió en el reclamo de ilegalidad al artículo 50 de la Ley N° 20.255; sin embargo, dicha norma cuando habla de confidencialidad y manejo de información privilegiada lo hace en relación a las políticas de solución de conflicto de intereses, que tampoco es el caso que nos ocupa.

UNDÉCIMO: Por otra parte, coadyuva a la decisión de publicidad lo dispuesto en el artículo 26 del D.L. 3.500 que prescribe que: *“Toda publicación de la composición de la cartera de inversión de los distintos*



Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que establezca una norma de carácter general de la Superintendencia. Con todo, esta última podrá publicar la composición de la cartera de inversión agregada de los Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado”. En consecuencia, por aplicación de esta norma es evidente que tratándose, en la especie, de publicidad referida a operaciones pretéritas la regla de publicidad es la que rige.

DUODÉCIMO: En consecuencia, el reclamo de ilegalidad debe ser desestimado al no infringirse las normas que acusa la reclamante en la decisión de amparo impugnada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República y en los artículos 5, 10, 11 letra c) y 28 de la Ley N° 20.285, Ley de Transparencia, **se rechaza**, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido por Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. en contra de la Decisión de Amparo respectiva, pronunciada por el Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023

Se previene que la abogada integrante Sra. Catalina Infante Correa estuvo por condenar en costas a la reclamante.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Contencioso Administrativo-232-2023.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gay Gariazzo y por la Abogada Integrante señora Catalina Infante Correa. No firman el Ministro señor Mera ni la Abogada señora Infante por encontrarse ausentes.



Tomás Guillermo Gray Gariazzo
Ministro
Corte de Apelaciones
Quince de abril de dos mil veinticuatro
13:07 UTC-4



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXYXXMFZMBY

Proveído por el Señor Presidente de la Séptima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a quince de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXYXXMFZMBY

C.A. de Santiago

Santiago, quince de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Aldo Molinari Valdés, abogado, en representación de **Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.**, y deduce reclamo de ilegalidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 y siguientes de la ley 20.285 (en adelante también “Ley de Transparencia” o “LT”) en contra de las Decisiones de Amparo (en adelante “DA”), pronunciadas por el **Consejo para la Transparencia** (en adelante “CPLT”) en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023, en cuya virtud acogió el amparo interpuesto por doña Hilda Isabel Olivares Leiva en contra de la Superintendencia de Pensiones. Solicita que se acoja el reclamo, declarando la ilegalidad de la decisión, con costas.

Sostiene que el 7 de noviembre de 2022, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva solicitó a la Superintendencia de Pensiones la siguiente información: “notas explicativas de los informes diarios de todas las administradoras de fondos de pensiones, comprendidas entre el 01 de enero de 2015 hasta 01 enero del año 2022”. La Superintendencia confirió traslado a las AFP, las que se opusieron, por lo que el organismo denegó la información requerida, en los términos dispuestos por el inciso 3° del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva dedujo reclamo ante el CPLT solicitando amparo a su derecho a la información, el que fue acogido por dicho organismo.

Argumenta que la decisión reclamada debe ser dejada sin efecto, por cuanto las notas explicativas de los informes diarios que las AFP envían a la Superintendencia para efectos de fiscalización, contienen información comercial sensible acerca del manejo y de las decisiones financieras de las Administradoras, respecto de la cual existe un deber de reserva. Añade que las notas explicativas de los informes diarios que las AFP entregan a la Superintendencia contienen información financiera detallada y altamente sensible acerca de la actividad económica de las Administradoras. Expone que la decisión confunde el deber de informar con la publicidad de la información, pues el deber de las AFP de informar las notas explicativas de los informes diarios a la Superintendencia, no se encuentra asociado a un deber de publicidad de la información por parte de la Superintendencia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXXXXMXZMBY

Por otra parte, asevera que en el caso de autos concurren claramente las causales de reserva establecidas en los artículos 21 N°2 y N°5 de la Ley de Transparencia, razón por la cual es necesario que se declare la reserva de la información. Precisa que la publicidad de la información es de tal gravedad, que pone en riesgo el funcionamiento de todo el sistema de pensiones. Recalca que la información solicitada se encuentra amparada en la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia al tratarse de información cuya publicidad afectaría los derechos de carácter comercial o económico de ProVida. Sostiene que es tal la gravedad, que su publicidad pone en riesgo las utilidades que perciban los afiliados y, por ende, todo el sistema de pensiones. Ello, a su juicio resulta tan evidente, que ha sido la propia Excelentísima Corte Suprema la que actuando de oficio en un caso idéntico al de autos, declaró la reserva de la información en causa Rol N° 36.305-2019.

Estima que la información solicitada se encuentra amparada en la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, toda vez que existen leyes de quórum calificado que decretan la reserva de la información.

Agrega que la Decisión del CPLT debe dejarse sin efecto, por cuanto la publicidad de la información solicitada vulnera los derechos fundamentales de ProVida, en particular, el derecho de propiedad, la libertad económica y la igualdad ante la ley.

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicita que se acoja el reclamo en contra de la Resolución del Consejo para la Transparencia que contiene la Decisión al Procedimiento Amparo Rol C11749-22, C11751-22, C11752-22, CC1753-22, C11754-22, C11756-22 y C11758-22, y se revoque la Decisión contenida en el numeral I y II de la parte resolutive de la Decisión del precitado Consejo, rechazándose totalmente el acceso a la información solicitada en todas sus partes, por la concurrencia de las causales de reserva individualizadas precedentemente, con costas.

SEGUNDO: Que informó el Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del reclamo, con costas.

Luego de reseñar los principales hitos de la tramitación del amparo interpuesto y los argumentos de la AFP reclamante, sostiene que la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP ha



sido ratificada reiteradamente por la jurisprudencia emanada de esta Corte y de la Excm. Corte Suprema, en las sentencias que cita.

Expone que la información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República y artículos 5°, 10 y 11 letra c) de la LT, aunque haya sido generada por las AFP, pues obra en poder de la Superintendencia de Pensiones en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, formando parte de expedientes administrativos y ha servido de fundamento a resoluciones del mismo carácter.

Asevera que la entrega de la información que se ha ordenado proporcionar en la Decisión de Amparo reclamada, no afecta los derechos económicos ni comerciales de la AFP reclamante, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Añade que el artículo 50 de la ley 20.255, el artículo 151 del D.L. 3.500 y el artículo 164 de la ley 18.045 no constituyen leyes de quórum calificado que establezcan la reserva de las notas explicativas.

Por último, estima que no procede la condena en costas al Consejo en la resolución de los reclamos de ilegalidad.

Pide el rechazo del reclamo de ilegalidad planteado por AFP Provida S.A., con costas.

TERCERO: Como puede derivarse de lo anterior, la AFP reclamante plantea cuatro puntos de presunta ilegalidad: a) Las Notas Explicativas de los informes diarios que las AFP envían a la Superintendencia contienen información comercial sensible acerca del manejo y de las decisiones financieras de las AFP, respecto de lo cual existe un deber de reserva; b) En el presente caso, concurren claramente las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 LT; c) La reserva de la información solicitada se encuentra amparada por lo dispuesto en los artículos 151 del D.L. N° 3.500, en el artículo 50 de la Ley N° 50 de la Ley N° 20.255 y artículos 164 y 165 de la Ley N° 18.045, y d) Divulgación de la información solicitada afecta derechos constitucionales de AFP Capital S.A. como los de desarrollar su actividad económica específica; derecho de propiedad sobre los antecedentes relativos a la gestión que realiza y derecho de igualdad ante la ley.



CUARTO: Tal como lo sostiene el Consejo para la Transparencia, el tema que ha sido sujeto al escrutinio judicial en esta causa ya ha sido resuelto por la judicatura en las causas aludidas por dicha institución.

En primer lugar, cabe citar el reclamo deducido por la Superintendencia de Pensiones en causa Rol 10.390-2017, en la que se hicieron partes como coadyuvantes de la Superintendencia las AFP Habitat, Modelo y Plan Vital, dictándose sentencia definitiva el 12 de noviembre de 2018, ejecutoriada, que rechazó el reclamo, el que se fundaba en los mismos argumentos ahora esgrimidos por la AFP reclamante.

Lo mismo sucedió con las sentencias dictadas con fecha 29 de julio de 2021 en las causas Roles 583-2019, 585-2019, y 591-2019, en virtud de reclamos interpuestos por AFP Capital, Modelo, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte, rechazando los reclamos. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja mediante autos Rol N° 53.109-2021, el cual fue declarado inadmisible por la Excm. Corte Suprema en sentencia de fecha 31 de agosto de 2021. Luego, el CPLT con fecha 31 de marzo de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C7534-19 (que dispuso la entrega de copia de las notas explicativas de los informes diarios D1 de las AFP, desde el año 2002 hasta septiembre de 2019), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad en las causas Roles N° 189-2020, 213-2020, y 214-2020, interpuestos por AFP Modelo, Capital, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas con fecha 8 de junio de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad antes mencionados.

Posteriormente, el CPLT con fecha 9 de abril de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C2270-19 (que dispuso la entrega de copia de los informes diarios de los fondos de pensiones de los meses de junio a octubre del año 2008, como asimismo, las notas explicativas y balances), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad Roles N° 226-2020, 235-2020, y 238-2020, interpuestos por AFP Modelo, Provida, y Capital, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas con fecha 2 de agosto de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja mediante autos Rol N° 56.177-2021, el cual fue declarado inadmisible por la Excm. Corte Suprema en sentencia de fecha 19 de agosto de 2021.



Luego, es doctrina ya asentada por esta Corte de Apelaciones y por la Excma. Corte Suprema, la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP.

QUINTO: Como primer y segundo motivo de ilegalidad, la AFP reclamante sostiene que las referidas notas explicativas están protegidas por las causales de reserva de información del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la LT, por cuanto (en relación al numeral 2°) la entrega de la información solicitada afecta sus derechos económicos y comerciales, ya que los informes diarios de los fondos de pensiones, las notas explicativas y los balances, constituyen información de su propiedad y de carácter estratégico, cuya divulgación, no solo afectaría a las propias administradoras sino que a todas las personas que se encuentran afiliadas a las mismas. Considera así que se trata de información que contiene las estrategias de inversión de los Fondos de Pensiones e invoca en su favor la normativa que indica.

En relación al N° 5 indica que la información constituye información sensible y de carácter reservado, lo que vincula con los artículos 151 del D. L. N° 3.500 citado, 50 de la Ley N° 20.255 y 164 y 165 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, por lo que la información solicitada puede generar serios perjuicios, tanto a la AFP como a los Fondos que administra.

SEXTO: Como tantas veces se ha señalado, conforme al artículo 8° de la Constitución Política de la República, complementado por los artículos 10 y 21 de la LT, la publicidad de la información pública constituye la regla general y la reserva, su excepción. Por lo tanto, cuando se invoca la excepción a la regla, ella debe acreditarse en forma fehaciente y los preceptos legales invocados deben interpretarse siempre en forma restrictiva en relación al derecho invocado.

En efecto, el citado artículo 8° de la Carta Fundamental establece lo siguiente: *“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”*.

Por su parte el artículo 10 de la LT, prescribe lo siguiente: *“Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXXXXMXZMBY

ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo excepciones legales”.

A su vez, el artículo 21 N° 2 de la LT dispone como causal de reserva de la información *“Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”.*

Por su parte, el N° 5 del artículo 21, dispone como causal de reserva: *“Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política”.*

SÉPTIMO: De las normas precedentes se desprende que la publicidad de la información constituye la regla general y la reserva, su excepción, por lo tanto, cuando se invoca la excepción a la regla, ella debe acreditarse en forma fehaciente y los preceptos legales invocados deben interpretarse siempre en forma restrictiva en relación al derecho invocado.

OCTAVO: Que en lo relativo al artículo 21 N° 2 de la LT cabe destacar que corresponde al reclamante acreditar de qué forma las Notas Explicativas cuya reserva se pretende afectan derechos de carácter comercial o económico.

En este contexto, las notas explicativas permiten, precisamente, “explicar” o entender la información que se contiene en los formularios D1 que la AFP remite a la Superintendencia de Pensiones, es decir, se trata de un accesorio de dicho formulario y por lo tanto corre la misma suerte de ese documento. Siendo así, difícil resulta aceptar su carácter de reservado si estas forman parte del formulario D1 que se encuentra en poder de la Superintendencia y que además aparece publicado en el sitio web de la referida entidad pública. En consecuencia, no se entiende cómo dicha información que persigue explicar otra que es de carácter pública pueda revestir el carácter de reservada, porque de serlo hace ilusoria la primera. Cabe considerar además, que tratándose de información que está en poder de un órgano de la Administración, como lo es la Superintendencia y considerando que el artículo 10 de la LT desarrolla el principio de publicidad



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXXXXMXZMBY

contenido en el artículo 8° de la Carta Política, la información requerida queda comprendida en más de alguno de los vocablos que menciona el mismo artículo por ejemplo “expedientes”, pues sin duda toda la información que la AFP remite a la Superintendencia conforma un expediente relativo a su información financiera o de inversión.

Además, la reclamante tampoco ha demostrado que la publicación de las notas explicativas afecte concretamente derechos comerciales o económicos suyos, siendo sus argumentos verdaderas especulaciones no demostradas fehacientemente, más aún si se considera que la información ordenada entregar es de antigua data y comprende los años 2015 a 2022.

NOVENO: En relación al argumento de la reclamante -vinculado al N° 5 del artículo 21 de la LT y al tercer motivo de ilegalidad- en cuanto a que la decisión cuestionada es reservada según se infiere de los artículos 151 del Decreto Ley N° 3500, artículo 50 de la Ley N° 20.25 y 164 y 165 de la Ley N° 18.045, también corresponde desechar tales planteamientos.

Al respecto cabe señalar que el artículo 151 del D.L. N° 3.500 dispone lo siguiente: *“Los directores de una Administradora, sus controladores, sus gerentes, administradores y, en general, cualquier persona que en razón de su cargo o posición tenga acceso a información de las inversiones de los recursos de un Fondo que aún no haya sido divulgada oficialmente al mercado y que por su naturaleza sea capaz de influir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones, deberán guardar estricta reserva respecto de esa información. Las personas a que se refiere este inciso estarán afectas a lo dispuesto en el artículo 166 de la ley N° 18.045”.*

“Asimismo, se prohíbe a las personas mencionadas en el inciso anterior valerse directa o indirectamente de la información reservada, para obtener para sí o para otros, distintos de cualquiera de los Fondos de Pensiones, ventajas mediante la compra o venta de valores”.

“Las personas que participen en las decisiones sobre adquisición, enajenación o mantención de instrumentos para alguno de los Fondos de Pensiones, no podrán comunicar estas decisiones a personas distintas de aquellas que deban participar en la operación por cuenta o en representación de la Administradora o de los Fondos”.

Como se ve, dicha disposición establece una prohibición de difundir información sobre inversiones aún no divulgada al mercado que pueda influir en la cotización de los valores de dicha inversión o pueda implicar ventajas a



terceros, que no es el caso de autos, pues aquí se trata de dar a conocer las notas que explican los estados financieros de la AFP en el pasado, es decir, información respecto de la cual ya no se corre el riesgo que la norma intenta bloquear de otorgar ventajas a quien conoce de ella o que pudiera modificar los valores de las inversiones en períodos ya pasados.

DÉCIMO: Que también se aludió en el reclamo de ilegalidad al artículo 50 de la Ley N° 20.255; sin embargo, dicha norma cuando habla de confidencialidad y manejo de información privilegiada lo hace en relación a las políticas de solución de conflicto de intereses, que tampoco es el caso que nos ocupa.

Por último, lo relativo al artículo 164 y siguiente de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores no resulta aplicable en la especie, pues dicho precepto alude a la información privilegiada no divulgada al mercado, lo que en el presente caso no sucede, pues las Notas Explicativas -como ya se sabe- son publicadas en la página web de la reclamante.

Por consiguiente, ninguna de las disposiciones citadas por la reclamante configura la causal de reserva contemplada en el numeral 5° del citado artículo 21 LT, por lo que también esa alegación debe ser desestimada.

UNDÉCIMO: Por último, en lo que concierne al cuarto motivo de ilegalidad, esto es que la información ordenada entregar afectaría gravemente distintos derechos constitucionales de la AFP Capital y de los afiliados, tampoco puede tener cabida esa aseveración.

En cuanto a la supuesta afectación del derecho de propiedad de los antecedentes relativos a la gestión que la AFP realiza, tampoco es acertada dicha tesis, desde que la información cuya publicidad se establece por el CPLT no tiene el efecto de develar sus operaciones en el mercado que permitan predecir sus operaciones e inversiones y lo debatido en la especie no es la propiedad que tenga la AFP sobre esos antecedentes, sino el acceso público a esa información y que fue solicitada para un fin específico dentro de un proceso administrativo.

Del mismo modo, menos puede ponerse en peligro para los afiliados esa información, en cuanto a la titularidad de sus fondos previsionales, quienes no han manifestado aprehensión alguna al respecto, no correspondiendo a la AFP reclamante asumir la representación de éstos, unido a que no se ha acreditado cómo se produciría la supuesta afectación.



Por otra parte, de modo alguno puede inferirse que exigir la divulgación de esa información afecte el derecho de la reclamante a desarrollar su actividad económica específica, ya que no hay una relación de causalidad entre ambas circunstancias. El CPLT simplemente ha ordenado que la AFP reclamante haga entrega de la información requerida, pero en caso esa decisión trae como consecuencia que esa institución previsional siga desarrollando sus labores. De todas formas, la alegación de la reclamante resulta exagerada y absurda, por lo que debe ser desestimada.

En lo atinente a la eventual infracción del derecho de igualdad ante la ley, pugna ese aserto con el mero hecho que las DA impugnadas afectaron a todas las AFP, como se deduce del alcance de esas decisiones y de que todas las involucradas hayan deducido sendas reclamaciones de ilegalidad ante esta Corte.

DUODÉCIMO: Finalmente, coadyuva la decisión de publicidad lo dispuesto en el artículo 26 del D.L. 3.500 que prescribe que: *“Toda publicación de la composición de la cartera de inversión de los distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que establezca una norma de carácter general de la Superintendencia. Con todo, esta última podrá publicar la composición de la cartera de inversión agregada de los Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado”*.

En consecuencia, por aplicación de esta norma es evidente que tratándose, en la especie, de publicidad referida a operaciones pretéritas la regla de publicidad es la que rige.

DECIMOTERCERO: Corolario de todo lo anterior, el reclamo de ilegalidad debe ser desestimado al no infringirse las normas que esgrime la reclamante en la decisión de amparo impugnada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República y en los artículos 5, 10, 11 letra c) y 28 de la Ley N° 20.285, Ley de Transparencia, **se rechaza**, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido por Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. en contra de la Decisión de Amparo respectiva, pronunciada por el Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023.




Se previene que la abogada integrante Sra. Catalina Infante Correa estuvo por condenar en costas a la reclamante.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Contencioso Administrativo-235-2023.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gay Gariazzo y por la Abogada Integrante señora Catalina Infante Correa. No firman el Ministro señor Mera ni la Abogada señora Infante por encontrarse ausentes.



Tomás Guillermo Gray Gariazzo
Ministro
Corte de Apelaciones
Quince de abril de dos mil veinticuatro
13:07 UTC-4





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXXXXMXZMBY

Proveído por el Señor Presidente de la Séptima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a quince de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



C.A. de Santiago

Santiago, quince de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de **Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.**, y deduce reclamo de ilegalidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 y siguientes de la ley 20.285 (en adelante también “Ley de Transparencia” o “LT”) en contra de la Decisión de Amparo (en adelante “DA”) C11756-22, pronunciada por el **Consejo para la Transparencia** (en adelante “CPLT”) en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023, en cuya virtud acogió el amparo interpuesto por doña Hilda Isabel Olivares Leiva en contra de la Superintendencia de Pensiones. Solicita que se acoja el reclamo, declarando la ilegalidad de la decisión de amparo, con costas.

Sostiene que el 7 de noviembre de 2022, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva solicitó a la Superintendencia de Pensiones la siguiente información: “notas explicativas de los informes diarios de todas las administradoras de fondos de pensiones, comprendidas entre el 01 de enero de 2015 hasta 01 enero del año 2022”. La Superintendencia confirió traslado a las AFP, las que se opusieron, por lo que el organismo denegó la información requerida, en los términos dispuestos por el inciso 3° del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, la señora Hilda Isabel Olivares Leiva dedujo reclamo ante el CPLT solicitando amparo a su derecho a la información, el que fue acogido por dicho organismo.

Argumenta que la decisión reclamada debe ser dejada sin efecto, por cuanto el ámbito de aplicación de la Ley N° 20.285 no alcanza a las AFP, al no ser sujetos pasivos de la misma.

Por otra parte, sostiene que la información solicitada es objeto de la reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la ley 20.285, pues se trata de información que contiene las estrategias de inversión de los Fondos de Pensiones, gestión en que por mandato legal se debe propender a obtener una adecuada rentabilidad y seguridad, conforme prescribe el artículo N° 147 del D.L 3.500. Asimismo, refiere que la reserva de la información solicitada se encuentra amparada en el Decreto Ley N°3500, en el artículo 50 de la ley 20.255 y artículos 164 y siguientes de la ley 18.045.

Hace presente que divulgar información sensible sobre los fondos de pensiones y su rentabilidad, perjudicaría directamente el derecho de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WSLTXMHZMBY

propiedad de la administradora, los fondos de pensiones, los afiliados y clientes de productos voluntarios, según lo regulado por medio de la ley 19.628 sobre protección de datos personales.

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicita que se acoja el reclamo y declarar la ilegalidad de la decisión de amparo ya referida, con costas; y, por consiguiente, declarar que la Superintendencia de Pensiones no está obligada a proporcionar a la Sra. Olivares la información que requiere.

SEGUNDO: Que informó el Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del reclamo, con costas.

Luego de reseñar los principales hitos de la tramitación del amparo interpuesto y los argumentos de la AFP reclamante, sostiene que la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP ha sido ratificada reiteradamente por la jurisprudencia emanada de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema, en las sentencias que cita.

Expone que la información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República y artículos 5°, 10 y 11 letra c) de la LT, aunque haya sido generada por las AFP, pues obra en poder de la Superintendencia de Pensiones en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, formando parte de expedientes administrativos y ha servido de fundamento a resoluciones del mismo carácter.

Asevera que la entrega de la información que se ha ordenado proporcionar en la Decisión de Amparo reclamada, no afecta los derechos económicos ni comerciales de la AFP reclamante, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Añade que el artículo 50 de la ley 20.255, el artículo 151 del D.L. 3.500 y el artículo 164 de la ley 18.045 no constituyen leyes de quórum calificado que establezcan la reserva de las notas explicativas.

Por último, estima que no procede la condena en costas al Consejo en la resolución de los reclamos de ilegalidad.

Pide el rechazo del reclamo de ilegalidad planteado por AFP Uno S.A., con costas.

TERCERO: Como puede derivarse de lo anterior, la AFP reclamante plantea cuatro tópicos de presunta ilegalidad: a) Ámbito de aplicación de la



Ley N° 20.285, sosteniendo que su representada no es sujeto pasivo de esa normativa; b) La información solicitada es objeto de la reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la LT; c) La reserva de la información solicitada se encuentra amparada por lo dispuesto en el D.L. N° 3.500 y en artículo 50 de la Ley N° 50 y artículo 164 de la Ley N° 18.045 y d) Divulgación de la información solicitada afecta el derecho de propiedad de AFP UNO S.A., los fondos de pensiones, los afiliados y clientes de productos voluntarios, conforme a lo regulado en la Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales.

CUARTO: Tal como lo sostiene el CPLT, el tema objeto del presente reclamo ya ha sido resuelto por la judicatura en las causas aludidas por dicha institución.

En primer lugar, cabe citar el reclamo deducido por la Superintendencia de Pensiones en causa Rol 10.390-2017, en la que se hicieron partes como coadyuvantes de la Superintendencia las AFP Habitat, Modelo y Plan Vital, dictándose sentencia definitiva el 12 de noviembre de 2018, ejecutoriada, que rechazó el reclamo, el que se fundaba en los mismos argumentos ahora esgrimidos por la AFP reclamante.

Lo mismo sucedió con las sentencias dictadas con fecha 29 de julio de 2021 en las causas Roles 583-2019, 585-2019, y 591-2019, en virtud de reclamos interpuestos por AFP Capital, Modelo, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte, rechazando los reclamos. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja mediante autos Rol N° 53.109-2021, el cual fue declarado inadmisibile por la Excm. Corte Suprema en sentencia de fecha 31 de agosto de 2021. Luego, el CPLT con fecha 31 de marzo de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C7534-19 (que dispuso la entrega de copia de las notas explicativas de los informes diarios D1 de las AFP, desde el año 2002 hasta septiembre de 2019), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad en las causas Roles N° 189-2020, 213-2020, y 214-2020, interpuestos por AFP Modelo, Capital, y Provida, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas con fecha 8 de junio de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad antes mencionados.

Posteriormente, el CPLT con fecha 9 de abril de 2020, dictó la decisión de amparo Rol C2270-19 (que dispuso la entrega de copia de los informes diarios de los fondos de pensiones de los meses de junio a octubre



del año 2008, como asimismo, las notas explicativas y balances), la que fue objeto de reclamos de ilegalidad Roles N° 226-2020, 235-2020, y 238-2020, interpuestos por AFP Modelo, Provida, y Capital, respectivamente, siendo confirmada la citada decisión por esta Corte mediante sentencias dictadas con fecha 2 de agosto de 2021, que rechazó todos los reclamos de ilegalidad. El fallo contra AFP Capital, fue objeto de recurso de queja mediante autos Rol N° 56.177-2021, el cual fue declarado inadmisibile por la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 19 de agosto de 2021.

Luego, es doctrina ya asentada por esta Corte de Apelaciones y por la Excma. Corte Suprema, la publicidad de las notas explicativas de los informes diarios de las AFP.

QUINTO: Siguiendo la doctrina sustentada en los fallos referidos, y en relación con el primer motivo de ilegalidad que plantea la reclamante, las AFP están sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, para lo cual aquellas deben remitir a ésta diversa información que le permite ejercer su función de control. Dentro de este contexto, de acuerdo al Libro IV, Título VIII, Capítulo II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el Informe Diario que debe ser proporcionado por las AFP a la Superintendencia, está compuesto por un conjunto de datos codificados a través de diversos formularios electrónicos, entre ellos el denominado “D1”, el cual comprende: Balance Diario, Flujo de Caja, Estado de Variación del Patrimonio y otra información general. Por su parte el Libro IV, Título VII, letra C, Capítulo II, Sección II, “Notas Explicativas”, en relación a los estados financieros señala que: *“Los estados financieros de los Fondos de Pensiones deberán ser acompañados por notas explicativas, en adelante notas, las que formarán parte integrante de ellos. Estas notas deberán ser preparadas por la administración de la sociedad y constituyen una relación de antecedentes que aportan información adicional sobre las cifras contenidas en los estados financieros, así como la divulgación de información que no está directamente reflejada en dichos estados, permitiendo de esta manera, una mejor comprensión de éstos y contribuyendo una base objetiva para los usuarios de dicha información”*.

A su vez, el Capítulo IV, letra A, N° 8, al referirse a las “notas explicativas” indica que éstas: *“deberán utilizarse para detallar los movimientos en cualesquiera de las partidas que correspondan a los siguientes ítems: Otros Ingresos, Otros Egresos, Otros Aumentos, Otras*



Disminuciones, Valores por Depositar Nacionales, Valores por Depositar Extranjeros, Valores en Tránsito, Excesos de Inversión, Provisión Impuestos y Otros, Valor del Patrimonio del Fondo de Pensiones, Provisión por inversiones en activos alternativos, Financiamiento de Cargos Bancarios y Cargos Bancarios”.

En consecuencia, de las normas precitadas puede inferirse que la información solicitada, al formar parte de aquella que debe remitirse habitualmente a la Superintendencia de Pensiones, conjuntamente con los estados financieros, AFP UNO es sujeto pasivo de la Ley de Transparencia, razón por lo que la información solicitada es de carácter pública, como se infiere de los artículos 5, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia.

SEXTO: En cuanto al segundo motivo de ilegalidad, esto es que las referidas notas explicativas están amparadas por la causal de reserva de información del artículo 21 N° 2 de la LT, aquello se funda en el hecho que la entrega de la información solicitada afecta sus derechos económicos y comerciales, ya que los informes diarios de los fondos de pensiones, las notas explicativas y los balances, constituyen información de su propiedad y de carácter estratégico, cuya divulgación, no solo afectaría a las propias administradoras sino que a todas las personas que se encuentran afiliadas a las mismas. Considera así que se trata de información que contiene las estrategias de inversión de los Fondos de Pensiones e invoca en su favor la normativa que indica.

SÉPTIMO: Como tantas veces se ha señalado, conforme al artículo 8° de la Constitución Política de la República, complementado por los artículos 10 y 21 de la LT, la publicidad de la información pública constituye la regla general y la reserva, su excepción. Por lo tanto, cuando se invoca la excepción a la regla, ella debe acreditarse en forma fehaciente y los preceptos legales invocados deben interpretarse siempre en forma restrictiva en relación al derecho invocado.

En efecto, el citado artículo 8° de la Carta Fundamental establece lo siguiente: *“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.*



Por su parte el artículo 10 de la LT, prescribe lo siguiente: *“Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo excepciones legales”*.

A su vez, el artículo 21 N° 2 de la LT dispone como causal de reserva de la información *“Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”*.

OCTAVO: Que las notas explicativas permiten, precisamente, “explicar” o entender la información que se contiene en los formularios D1 que la AFP remite a la Superintendencia de Pensiones, es decir, se trata de un accesorio de dicho formulario y por lo tanto corre la misma suerte de ese documento. Siendo así, difícil resulta aceptar su carácter de reservado si estas forman parte del formulario D1 que se encuentra en poder de la Superintendencia y que además aparece publicado en el sitio web de la referida entidad pública. En consecuencia, no se entiende cómo dicha información que persigue explicar otra que es de carácter pública pueda revestir el carácter de reservada, porque de serlo hace ilusoria la primera. Cabe considerar además, que tratándose de información que está en poder de un órgano de la Administración, como lo es la Superintendencia y considerando que el artículo 10 de la LT desarrolla el principio de publicidad contenido en el artículo 8° de la Carta Política, la información requerida queda comprendida en más de alguno de los vocablos que menciona el mismo artículo por ejemplo “expedientes”, pues sin duda toda la información que la AFP remite a la Superintendencia conforma un expediente relativo a su información financiera o de inversión.

Por otra parte, la reclamante tampoco ha demostrado que la publicación de las notas explicativas afecte concretamente derechos comerciales o económicos suyos, siendo sus argumentos verdaderas especulaciones no demostradas fehacientemente, más aún si se considera



que la información ordenada entregar es de antigua data y comprende los años 2015 a 2022.

NOVENO: En relación al tercer motivo de ilegalidad, consistente en que la reserva invocada se encuentra amparada en el D. L. N° 3500 de 1980, en cuanto a que la decisión cuestionada es reservada según se infiere de los artículos 151 y 154 letra d) del Decreto Ley N° 3500, también corresponde desechar tales planteamientos.

Al respecto cabe señalar que, la primera norma dispone: *“Los directores de una Administradora, sus controladores, sus gerentes, administradores y, en general, cualquier persona que en razón de su cargo o posición tenga acceso a información de las inversiones de los recursos de un Fondo que aún no haya sido divulgada oficialmente al mercado y que por su naturaleza sea capaz de influir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones, deberán guardar estricta reserva respecto de esa información. Las personas a que se refiere este inciso estarán afectas a lo dispuesto en el artículo 166 de la ley N° 18.045”.*

“Asimismo, se prohíbe a las personas mencionadas en el inciso anterior valerse directa o indirectamente de la información reservada, para obtener para sí o para otros, distintos de cualquiera de los Fondos de Pensiones, ventajas mediante la compra o venta de valores”.

“Las personas que participen en las decisiones sobre adquisición, enajenación o mantención de instrumentos para alguno de los Fondos de Pensiones, no podrán comunicar estas decisiones a personas distintas de aquellas que deban participar en la operación por cuenta o en representación de la Administradora o de los Fondos”.

Como se ve, dicha disposición establece una prohibición de difundir información sobre inversiones aún no divulgada al mercado que pueda influir en la cotización de los valores de dicha inversión o pueda implicar ventajas a terceros, que no es el caso de autos, pues aquí se trata de dar a conocer las notas que explican los estados financieros de la AFP en el pasado, es decir, información respecto de la cual ya no se corre el riesgo que la norma intenta bloquear de otorgar ventajas a quien conoce de ella o que pudiera modificar los valores de las inversiones en períodos ya pasados.

En relación al artículo 154 letra d), este artículo dispone que: *“Sin perjuicio de lo establecido los artículos anteriores, son contrarias a la presente ley las siguientes actuaciones u omisiones efectuadas por las*



Administradoras: d) La comunicación de información esencial relativa a la adquisición, enajenación y mantención de activos por cuenta de cualquiera de los Fondos a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas, en representación de la Administradora”.

De lo expuesto puede observarse que tampoco esta norma impide la entrega de la información pues se encuentra vinculada a operaciones presentes que se estén desarrollando y no a información pretérita como la que aquí se discute.

DÉCIMO: Que también se aludió en el reclamo de ilegalidad al artículo 50 de la Ley N° 20.255; sin embargo, dicha norma cuando habla de confidencialidad y manejo de información privilegiada lo hace en relación a las políticas de solución de conflicto de intereses, que tampoco es el caso que nos ocupa.

En lo atinente al mentado artículo 164 y siguientes de la Ley N° 18.045, la reclamante no explica en qué forma se produce la infracción.

UNDECIMO: Por último, en lo atinente al cuarto motivo de ilegalidad, esto es que la Decisión de Amparo impugnada vulnera el derecho de propiedad de la AFP, tampoco es acertada dicha tesis, desde que la información cuya publicidad se establece por el CPLT no tiene el efecto de develar sus operaciones en el mercado que permitan predecir sus operaciones e inversiones y lo debatido en la especie no es la propiedad que tenga la AFP sobre esos antecedentes, sino el acceso público a esa información y que fue solicitada para un fin específico dentro de un proceso administrativo.

DUODÉCIMO: Finalmente, coadyuva la decisión de publicidad lo dispuesto en el artículo 26 del D.L. 3.500 que prescribe que: *“Toda publicación de la composición de la cartera de inversión de los distintos Tipos de Fondos de Pensiones de cada una de las Administradoras, deberá referirse a períodos anteriores al último día del cuarto mes precedente. El contenido de dichas publicaciones se sujetará a lo que establezca una norma de carácter general de la Superintendencia. Con todo, esta última podrá publicar la composición de la cartera de inversión agregada de los Fondos de Pensiones referida a períodos posteriores al señalado”.*



En consecuencia, por aplicación de esta norma es evidente que tratándose, en la especie, de publicidad referida a operaciones pretéritas la regla de publicidad es la que rige.

DECIMOTERCERO: En consecuencia, el reclamo de ilegalidad debe ser desestimado al no infringirse las normas que acusa la reclamante en la decisión de amparo impugnada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República y en los artículos 5, 10, 11 letra c) y 28 de la Ley N° 20.285, Ley de Transparencia, **se rechaza**, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido por Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. en contra de la Decisión de Amparo N° C-11756-22 pronunciada por el Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria N° 1350, de 21 de marzo de 2023

Se previene que la abogada integrante Sra. Catalina Infante Correa estuvo por condenar en costas a la reclamante.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Contencioso Administrativo-234-2023.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gay Gariazzo y por la Abogada Integrante señora Catalina Infante Correa. No firman el Ministro señor Mera ni la Abogada señora Infante por encontrarse ausentes.



Tomás Guillermo Gray Gariazzo
Ministro
Corte de Apelaciones
Quince de abril de dos mil veinticuatro
13:07 UTC-4



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WSLTXMHZMBY

Proveído por el Señor Presidente de la Séptima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a quince de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WSLTXMHZMBY